

Universidad de Chile
Instituto de la Comunicación e Imagen
Escuela de Periodismo

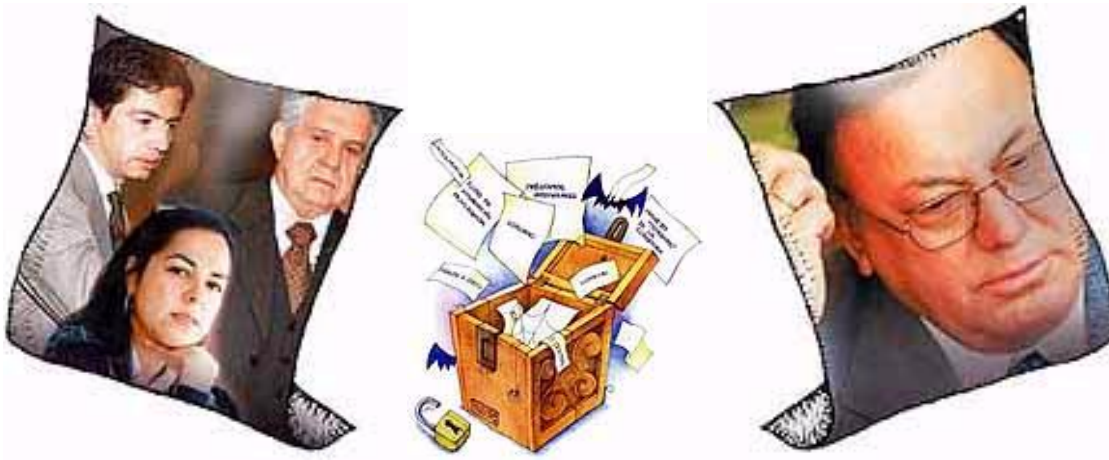
Inverlink

El nombre del escándalo

Autor: Daniel García Schilling
Profesor guía: Gustavo González

Santiago, octubre 2004

INVERLINK EL NOMBRE DEL EȘCÁNDALO



El 11 de marzo del 2003 recuperaron su libertad —bajo fianza— los máximos ejecutivos del cuestionado holding

Daniel García Schilling

Los rostros del caso



Carlos Massad

Gonzalo Rivas

Pamela Andrada

Enzo Bertinelli



Álvaro García

Patricio Villarroel

Julio Bustamante

Eduardo Monasterio



Óscar Landerretche

Ignacio Wulf

Javier Moya

Prólogo

El presente trabajo está basado en una completa recopilación de antecedentes del caso Inverlink en base conversaciones directas con los protagonistas de los hechos, fuentes judiciales y policiales que prefirieron mantener su reserva pero que aportaron valiosos antecedentes para reconstruir la compleja historia, archivos de prensa y el resultado de la comisión investigadora del caso Inverlink que llevó a cabo la Cámara de Diputados.

El cuerpo del relato está articulado en una serie de piezas que forman del expediente que actualmente están protegidas bajo el secreto del sumario y que tuve en mi poder.

Por obligaciones profesionales, primero en el Diario Financiero y posteriormente en El Mercurio, tuve la suerte de estar cubriendo en el día a día cada etapa de este caso, lo que me permitió dimensionar el impacto que este tuvo, desde el punto de vista político, económico y judicial.

La gran sorpresa...

Desde su oficina en el piso 21 de la torre Apoquindo —donde tenía una impresionante vista panorámica del sector oriente de Santiago— Eduardo Monasterio Lara dijo “no más” esa calurosa tarde del viernes 7 de marzo del 2003.

Ese día, el ahora caído Rey Midas del sistema financiero, cerró por última vez la puerta de su despacho en la presidencia del grupo de empresas Inverlink ante la incredulidad de sus empleados más cercanos, muchos de los cuales incluso lo despidieron entre aplausos.

Nunca más volvió a su castillo financiero y cuatro días más tarde estaba preso. Seguramente, quienes fueron testigos cómo esa tarde Monasterio vaciaba su oficina y retiraba sus dos computadores —con valiosa información que la policía de Investigaciones nunca encontró— no sospechaban que al poco tiempo los dos mil quinientos trabajadores del grupo estaban en la calle y su plana mayor tras las rejas.

Menos de un mes antes, el 1 de febrero del 2003, el ahora caído grupo de empresas Inverlink y sus principales ejecutivos estaban en el ojo del huracán luego que se conociera que Pamela Andrada, ex secretaria del entonces presidente del Banco Central, Carlos Massad, filtraba información reservada del ente Emisor a Enzo Bertinelli, mano derecha de Monasterio y gerente general de la corredora de bolsa del grupo.

A pesar de que a esas alturas el escándalo ya era de proporciones, tanto así que Bertinelli y Andrada estaban tras las rejas —entonces sólo por delito informático, cohecho y soborno— nadie esperaba la noticia que la Corporación de Fomento para la Producción (Corfo) hizo pública cerca de las 21 horas de ese día 7 de marzo. Menos aún el inquilino de La Moneda, el presidente Ricardo Lagos.

Mientras ese día la adrenalina corría a raudales por las venas de los periodistas que cubrían el caso para sus respectivos medios de comunicación, el entonces vicepresidente ejecutivo de la estatal y yerno del presidente Ricardo Lagos, Gonzalo Rivas, reconocía —visiblemente afectado— el desfalco de más de \$85.000 millones a manos del grupo Inverlink en complicidad con funcionarios de Corfo, partiendo por su ex jefe de tesorería Javier Moya Cucurella.

Este empleado —que ganaba \$1.200.000 al mes pero tenía un jeep Grand Cherokee 4x4 y una casa en la laguna Aculeo con lancha incluida— sustrajo el dinero a través de un intrincado fraude contable con los depósitos a plazo de la Corporación.

El golpe fue demasiado fuerte. Tanto que a los pocos días, Rivas dejaba su puesto asumiendo su responsabilidad política como jefe de repartición. En su reemplazo llegaba un experto en crisis, Óscar Landerretche. El otrora próspero grupo Inverlink —que contaban entre sus empresas con la AFP Magíster, la Isapre Vida Plena, la Clínica Las Lilas, Le Mans Desarrollo Compañía de Seguros de Vida, una corredora de bolsa y varios auspiciosos proyectos tecnológicos— ponía en peligro la estabilidad

del sistema financiero chileno y, además, generó una crisis política de proporciones.

El fraude de Inverlink provocó pérdidas directas a los afectados por \$ 110.000 millones, es decir, US\$ 174 millones; sepultó el pequeño imperio empresarial construido por Eduardo Monasterio; significó el mayor desfalco sufrido por Corfo en sus 65 años de existencia; la paralización por una semana del mercado de capitales chileno; el deterioro de la confianza hacia las entidades fiscalizadoras y la pérdida de los ahorros de miles de pequeños inversionistas.

Se trató también de un gigantesco acto de corrupción ejecutado por un grupo empresarial privado que echó mano a las herramientas del sistema y se coludió con otros agentes del mercado para delinquir.

Para dimensionar el impacto de las fechorías del grupo Inverlink basta señalar que en su fase de mayor éxito —entre fines de 2002 y febrero de 2003—, Inverlink movía alrededor de \$ 30.000 millones diarios, algo así como US\$ 43 millones.

Este dinero entraba y salía a través de distintas vías, principalmente de empresas que actuaban ilegalmente como captadoras de ahorros y, en menor medida, por los tres fondos mutuos (Profit, Qualitas y Millenniun), los que cuando se destapó el fraude fueron liquidados por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Sin embargo, la mayor parte de estos recursos pasaba a una contabilidad clandestina, una “cutufa”¹ en donde se hacían los calces de vencimientos y se distribuían los fondos para cubrir los compromisos con los clientes. El que caía en la trampa ponía el dinero para pagar a los pocos que se retiraban.

La contabilidad paralela también servía para pagar coimas y sobornos a la red de colaboradores en bancos y entidades públicas, y para hacer transferencias al exterior. Recursos que posteriormente retornaban al país bajo la figura de créditos.

Estas triangulaciones fuera de Chile —principalmente Estados Unidos— tenían como finalidad blanquear los dineros ingresados ilegalmente a través de la financiera clandestina y comprar formalmente participación en empresas y nuevos activos para expandir el conglomerado.

Inverlink organizó una red de colaboradores en bancos, empresas e instituciones públicas, poniendo en entredicho la moralidad que se estilaba en las relaciones de negocios y en el mercado de valores. A medida que el grupo crecía eran más los empleados y ejecutivos que pasaban a engrosar las filas del cartel, corrompidos mediante coimas, regalos, sobresueldos y comisiones no tributables.

El corazón de la financiera informal montada por Eduardo Monasterio era la corredora de bolsa Inverlink, manejada por Enzo Bertinelli. Esta

¹ Cutufa: se trataba de una financiera informal que operaba al interior del Ejército de Chile desde mediados de los ochenta hasta principios de los años noventa. Finalmente dos oficiales de la época terminaron estafando a una gran cantidad de personas, tanto civiles como militares e, incluso, hubo un crimen vinculado a este caso, el asesinato del empresario Aurelio Sichel.

compraba documentos (pagarés del Banco Central, certificados de depósito, letras hipotecarias y otros papeles) y también operaba con pactos de retrocompra² formales.

Esos mismos instrumentos, documentos y pactos, eran utilizados dos o más veces para hacer nuevos compromisos, con los que captaba dinero de personas y empresas. Con este fin los ejecutivos de ventas de Inverlink ofrecían tasas de interés más altas que las del promedio del sistema financiero. Ello tentó a centenares de confiados clientes, muchos de los cuales depositaron en las manos de estos inescrupulosos los ahorros de toda una vida.

La corrida de estos hizo que la torre de naipes de Inverlink se derrumbara y las empresas del grupo comenzaran a quebrar una a una.

Este complejo ardid elaborado por Monasterio puso en tela de juicios los aparatos de control de las distintas entidades reguladores y fiscalizadoras, incluyendo el Servicio de Impuestos Internos (SII), que nunca detectó la gigantesca evasión de tributos que de hecho existió en la generación de los fondos irregulares y en las triangulaciones con bancos en el exterior. Lo que hasta hoy ha acreditado el SII es un fraude cercano a los \$3.000 millones. Sin embargo, las cifras de las platas negras de Inverlink con seguridad son mucho mayores.

² Pacto de retrocompra: Según la definición de la Superintendencia de Valores y Seguros se trata de un pacto por el cual una parte vende un valor y se compromete a comprarlo en un determinado plazo.

De hecho, junto con la quiebra de las empresas Inverlink y del destape de la red clandestina de funcionarios públicos y de ejecutivos del sector privado con que Monasterio sostenía sus negocios, tres altas autoridades públicas cayeron en la rodada: el presidente del Banco Central, Carlos Massad; el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Gonzalo Rivas, y el superintendente de Valores y Seguros, Alvaro Clarke.

El primero, un influyente pepedé cercano a La Moneda —es yerno del presidente Lagos— y los otros dos connotados Demócratacristianos de facciones opuestas.

He aquí la historia y datos inéditos del fraude contable más importante de la década de los noventa y comienzos de este siglo en Chile.

El escenario

El escándalo Inverlink fue el corolario de una seguidilla de casos de corrupción en los que se vieron involucrados funcionarios públicos entre mayo de 2002 e inicios de 2003. Sin duda esos fueron los momentos políticos más complejos por los que ha atravesado el Presidente Ricardo Lagos en su gestión, ya que dieron lugar a un sostenido fuego cruzado opositor.

Por ello, cuando se supo que Pamela Andrada filtraba a su amante datos reservados desde el Banco Central cayó la gota que rebalsó el vaso en el noticioso verano de 2003.

Todo ello hizo que la justicia chilena en octubre de 2004 se encontrara investigando a través de dos ministros en visita tres escándalos de corrupción de gran dimensión social y política, conocidos como los casos Coimas; MOP GATE, con el ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa de Gestión Territorial Ambiental (GATE) como actores; y el MOP CIADE, de la misma cartera y el Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa de la Universidad de Chile (CIADE).

El caso Coimas se refiere a las plantas de revisión técnica que operaban en la ciudad de Rancagua y que prestaban servicios de certificación del estado de los vehículos, lo cual es requisito para la renovación de los permisos de circulación.

En estas concesiones de servicios particulares, se denunciaron situaciones de cohecho y tráfico de influencias, en las cuales aparecieron implicados parlamentarios de gobierno que posteriormente fueron desaforados con el fin de llevar a cabo una investigación judicial.

Todo comenzó en octubre de 2002 cuando el empresario Carlos Filippi confesó haber pagado sobornos a autoridades gubernamentales para hacerse con la adjudicación de una planta de revisión técnica en las inmediaciones de la ciudad de Rancagua.

Esta acusación causó un terremoto político, puesto que entre los involucrados estaban el ex subsecretario de transportes, Patricio Tombolini, con el pago de un soborno de 22 mil dólares, y los diputados de la Democracia Cristiana (DC) Jaime Jiménez y Cristián Pareto, con 29 mil dólares cada uno.

Pero esta era sólo la punta de un iceberg. A partir de ese caso se tomó el hilo de un escándalo mucho mayor en donde se descubrió la existencia de un sistema que venía por años generando sobre valoración de contratos públicos, en colusión con una serie de contratistas, lo que significaba que funcionarios recibían de manera ilegal sumas de dinero que e agregaban a sus remuneraciones habituales, supuestamente por cumplir trabajos para las propias empresas contratistas, fuera de sus horas de trabajo funcionario.

Los casos se refieren a la sobrevaloración de los contratos de servicios y concesiones, mediante mecanismos en que los funcionarios del MOP se concertaban con los contratistas para postular a las concesiones de forma tal que el sobreprecio retornase a través de una pseudo consultora que canalizaba de regreso los dineros al ministerio, en donde se distribuían entre un gran número de funcionarios bajo la figura de sobresueldos.

Esta situación se realizó con la consultora GATE y CIADE, una dependencia de la Universidad de Chile abocada a prestar asistencia técnica empresas. La ministra en visita, Gloria Ana Chevesich se hizo cargo de las investigaciones por fraude al fisco y estafa, según se trate de un funcionario público o de privados involucrados en estas acciones ilícitas.

Capítulo I

¿Tienes un email?

¿Existe el crimen perfecto? Seguramente Enzo Bertinelli pensaba que sí. Este exitoso ingeniero comercial oriundo de Casablanca creía estar tocando el cielo hasta el fatídico enero de 2003. Por lo menos esa era la impresión de quienes compartieron esos innumerables “happy hour” en el Sport Café —local ubicado en la calle Aponquindo, frente a la Scuola Italiana— que frecuentaba junto a sus amigos de la plana mayor de Inverlink o lo veían acelerar con, a lo menos, tres pisco “sours” encima en su Audi Turbo A6 del 2003.

Sin embargo, Bertinelli no contaba con que uno de los fraudes mejor pensados de la historia de Chile quedara al descubierto por una casualidad.

Ello sucedió el miércoles 29 de enero. Ese día pasadas la 13:00 horas Pamela Andrada estaba tranquila sentada tras su escritorio cuando vio pasar a su jefe, el entonces presidente del Banco Central de Chile, Carlos Massad, quien salía a almorzar, trámite del cual no volvería hasta las tres de la tarde como era su costumbre.

Esto le dejaba un margen considerable de tiempo para realizar una rentable labor que no estaba contemplada en su contrato de trabajo y que ejecutaba desde hacía más de cuatro años. Sin embargo, la segunda secretaria del prestigioso economista de la Democracia Cristiana (DC) — con quien compartía militancia y trabajaba desde 1995 cuando Massad fue ministro de Salud y desde 1997 en el Central— cometió ese día el error más

grave de su vida y que sólo es propio de quien demuestra una excesiva confianza en sus pasos, aunque estos rayen en lo delictual.

Pamela Andrada, aprovechando su condición de “personal de confianza” y el acceso directo que tenía a la información privilegiada del ente Emisor, anticipaba periódicamente —antes de que el mercado tuviera acceso— datos clave del Banco Central al entonces tercer hombre del grupo Inverlink Enzo Bertinelli, quien además era gerente general de la corredora de bolsa del ahora cuestionado grupo de empresas.

La relación entre Pamela y Enzo tenía larga data. Se conocieron a comienzos de los noventa cuando ella trabajó como secretaria en una de las empresas del entonces incipiente grupo Inverlink.

A poco andar, la inteligencia del joven casablanquino y protegido del presidente del grupo, Eduardo Monasterio, llamó la atención de una ambiciosa Pamela Andrada.

No pasó mucho tiempo antes de que ambos se enfrascaran en una relación amorosa que, durante años, se mantuvo en la clandestinidad dado que Bertinelli era un hombre casado.

El quiebre de la relación amorosa fue la principal motivación para que Pamela utilizara sus amistades bien colocadas de la DC y dejara su puesto en Inverlink en 1995 para trabajar como secretaria en el ministerio de Salud, bajo las órdenes de Carlos Massad.

Pese a este aparente distanciamiento, Andrada y Bertinelli siempre mantuvieron un estrecho contacto, los que se estrecharon cuando la joven

comenzó a trabajar en el ente Emisor en 1997, también de la mano de un recién llegado Massad.

Y claro, su puesto de confianza la convirtió en un rentable producto para un calculador Bertinelli, quien ya a esas alturas estaba a cargo de la corredora de bolsa del grupo Inverlink y se especializaba en el mercado de acciones y dólares.

El exitoso ejecutivo comenzó a tramitar un ambicioso plan para que la asistente de Massad le enviara cierta información reservada antes que el mercado tuviera conocimiento de ella. De esta forma, Enzo consiguió que su ex amante le comenzara a enviar periódicamente este tipo de informes, ya sea por email o por teléfono. Pero este servicio no era gratis. Entre enero del 2001 e igual mes del 2003 a lo menos desembolsó personalmente cerca de \$42 millones ³.

Para los pagos utilizaba anticipos de sueldos —de forma tal que su esposa no se enterara de inusitados movimientos en las cuentas corrientes—, y los respaldaba con sus propias boletas de honorarios. Incluso, algunos de los cheques que recibió Pamela Andrada venían desde la caja de Inverlink Consultores —una de las empresas del holding— firmados por el propio Eduardo Monasterio.

La Brigada contra el Lavado de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones ya tiene acreditados ⁴ varios pagos directos del holding

³ Cifra que la Brigada Contra el Lavado de Activos extrajo de la suma de los saldos de las cuentas corrientes de Pamela Andrada y Enzo Bertinelli. Este informe consta en el expediente bajo el secreto de sumario.

⁴ Informe reservado de la Brigada de Lavado de Activos, firmado por el comisario Juan Francisco Hernández el 23 de mayo de 2003. Forma parte del secreto del sumario que mantiene el ministro en visita Patricio Villarroel Valdivia.

Inverlink a una productiva Pamela Andrada por la filtración de antecedentes reservados desde la testera del Central.

Esta confirmación echó por tierra la estrategia judicial de las defensas de Enzo Bertinelli y de la propia Andrada, quienes desde que se destapó el caso afirmaron que todo el dinero que recibió la ex secretaria correspondía a una “contribución” del ex gerente general de la corredora de bolsa Inverlink para tratar el delicado estado de salud que aqueja a la ex colaboradora de Massad. Pamela acreditó en el juicio que padecía esclerosis múltiple ⁵.

Sin embargo, los antecedentes que tiene la policía civil —y que forman parte del proceso— incluyen un amplio listado de depósitos, cheques y comprobantes de pagos recibidos por Andrada desde 1999 hasta 2003, realizados en su mayoría a través de Inverlink Consultores.

Dentro de la evidencias que maneja el juez a cargo de la investigación, Patricio Villarroel, también se incluyen todos los talonarios de boletas de Bertinelli. En ellas figuran una serie de emisiones irregulares con firmas diferentes y con montos que no han podido ser verificados.

Incluso, aparecen varias boletas fechadas en 1999 en circunstancias que en el SII, el inicio de actividades Bertinelli figura en septiembre de 2000.

⁵ Informe pericial con exámenes médicos presentado por el abogado de Andrada, Rodrigo Ávila.

El engranaje

Seguramente Pamela no reparaba de la importancia que tenía para el grupo Inverlink la casi trivial labor que ella cumplía todos los días desde su cómoda oficina a un costado de la plaza de la Constitución. Por eso ese miércoles 29 de enero no dudó en enviar directamente desde el computador de su jefe —otras veces reenviaba los informes a su correo y desde esa dirección se los remitía a Bertinelli— un mensaje cuyo encabezado rezaba “minuta pre consejo 30/01/2003”.

Como es de público conocimiento el Consejo del Banco Central está compuesto por cinco integrantes que, entre sus funciones, contempla una reunión mensual en la que establecen la política monetaria que va a seguir el ente Emisor conforme a la situación económica del país. En la práctica, el Consejo determina si sube, baja o mantiene las tasas de interés.

Por ello si un operador del mercado bursátil tuviera acceso a la resolución, aunque sea con algunos minutos de anterioridad, podría sacar una jugosa ganancia comprando, por ejemplo, depósitos a plazo en el entendido que las tasas van a subir o bien, desprendiéndose de ellos si éstas fueran a bajar. Estos y otros datos de importancia eran los que enviaba Pamela a su ex amante.

Sin embargo, ese día la suerte no estuvo con ella. El mensaje rebotó en la bandeja de entrada del correo de Massad por una simple razón: la secretaria escribió una “L” (ele) de más en la dirección de destino ebertinelli@inverlink.cl.

El texto del correo originalmente fue enviado por Cecilia Feliú, quien pertenecía a la división de política financiera del Banco Central el martes 28 de enero del 2003 a las 08:55 con copia a los cinco consejeros del ente Emisor, además de Massad, Camilo Carrasco —gerente general del organismo—el fiscal Miguel Angel Nacrur y otros tres altos ejecutivos.

“Adjunto minuta de la División de Política Financiera sobre la participación del Banco Central como agente fiscal de colocación de bonos del gobierno en el mercado chileno, a ser tratada en la próxima sesión del Consejo el jueves 30 de enero”, decía el email que además incluía un anexo de tres páginas con el detalle técnico de las operaciones financieras que se informaban.

Con el apuro, Pamela se preocupó de borrar de la bandeja de salida el mensaje pero no reparó en que había vuelto.

Cuando Carlos Massad llegó de vuelta de su almuerzo se encontró con este correo “rebotado” en su bandeja de outlook.

La primera impresión del prestigioso economista fue que estaba en presencia de un virus en su computador, presunción que se fundamentaba más en su poca habilidad informática que en cualquier otra razón, situación que siempre fue muy bien aprovechada por sus asistente.

Sin embargo, el inocente virus que estaba en el computador de Massad a los pocos minutos se convirtió en una bola de nieve que dio origen en ese mismo momento a un sumario en la entidad, el cual se manejó en la más absoluta reserva para determinar las responsabilidades durante las 24 horas siguientes.

Cuando Massad se dio cuenta de que él no había enviado el mensaje solicitó a unos pocos técnicos informáticos del banco que verificaran en los discos duros de su terminal y en los de sus colaboradores más directos todos los mensajes que habían salido en los últimos días. Adicionalmente, pidió que le tendieran una trampa al espía ya que su computador personal quedó sometido a un control que detectaría cualquier movimiento mientras el presidente del Central no estaba en su oficina.

Ya entrada la mañana del jueves 30 de enero los dardos de la investigación secreta —ante el asombro e incredulidad inicial de Carlos Massad— apuntaban a Pamela Andrada, hecho que quedó refrendado cuando la secretaria fue sorprendida “con las manos en la masa” revisando los correos de su jefe, lo que incluso quedó registrado en una cámara de video, instalada expresamente para sorprender al traidor.

En ese momento Massad informó de lo ocurrido a sus dos ejecutivos más cercanos: Camilo Carrasco y Miguel Ángel Nacrur, gerente general y fiscal de la entidad, respectivamente, quienes se hicieron cargo de la crisis a contar de ese momento. Nunca quiso hablar con su ex secretaria.

Nacrur —como buen abogado— se percató de las implicancias jurídicas que este hecho podía tener por lo cual no demoró en pedir una asesoría a su colega, el penalista Rodrigo Irrazábal —hijo de Manuel Irrazábal, prestigioso abogado actualmente retirado— quien frecuentemente prestaba servicios para el ente Emisor y otros bancos de la plaza.

Ese mismo día Irrazábal —acostumbrado a tratar casos en los que empleados bancarios cometen algún fraude menor en sus entidades—

consiguió que una derrumbada Pamela Andrada reconociera sus fechorías por escrito, las que justificó diciendo que estaba enferma —en el expediente consta que padece de esclerosis múltiple— y que Bertinelli le daba, a cambio de estos informes periódicos, una atención gratuita en la Clínica Las Lilas, entidad que formaba parte de las empresas del grupo Inverlink.

Tras la confesión, Andrada fue despedida inmediatamente e Irrázabal recomendó a las máximas autoridades del Central redactar una querrela criminal en contra de quienes resultaran responsables, la que finalmente se presentó el sábado 1 de febrero del 2003.

En ese momento la cúpula del Banco Central cometió su primer gran error comunicacional. La dirigencia trató de mantener en el más estricto secreto esta presentación judicial hasta el lunes, fecha en que los consejeros de la entidad —José de Gregorio (DC); Jorge Desormeaux (RN); María Elena Ovalle (independiente cercana a la UDI) y Jorge Marshall (PPD)— fueran informados.

Sin embargo, no contaban con que las eternas, prolíficas y misteriosas “fuentes policiales” alertaran a un reportero del diario “El Mercurio”, quien llevó la noticia en portada el día domingo 2 de febrero. Por la prensa se enteraron los consejeros, cosa que causó una profunda molestia en varios de ellos. Sobre todo en José de Gregorio, ex ministro de Economía en la administración del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle quien inmediatamente vio una nueva oportunidad para tomar protagonismo y, tal vez, postular a la testera del Banco Central.

Pero ese no fue el único error que cometieron las autoridades del Central.

Según recuerda Rodrigo Irrazábal ⁶, desde un comienzo fue partidario de solicitar a la justicia varias diligencias que nunca se concretaron y que —asegura—, podrían haber dejado en evidencia el accionar delictual del grupo Inverlink mucho antes de que se destapara el escándalo en la Corfo.

El jurista recuerda que, por ejemplo, planteó el 1 de febrero estaba la incautación de los computadores de Inverlink y, el 5 de este mes solicitó a la jueza (s) Elizabeth Reinoso —que posteriormente fue reemplazada por el ministro en vista Patricio Villarroel— oficiara a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) para que remitiera toda la información que tuviera el holding liderado por Eduardo Monasterio y el detalle de las operaciones. Lo mismo para la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), con informes de cuentas corrientes de sus principales ejecutivos.

Las solicitudes de Irrazábal —quien después debió dejar el caso al recibir cuestionamiento éticos— en la práctica quedaron en nada.

De hecho, las mismas autoridades del ente Emisor prefirieron marchar con calma en el caso y centrarse en las personas naturales que aparecían involucradas y desistieron de emprenderlas en contra del grupo Inverlink. Por ello es que las querellas sólo aparecieron los nombres de Bertinelli y Andrada.

⁶ Entrevista personal del autor de esta investigación con Rodrigo Irrazábal.

Nunca se van a saber a ciencia cierta si es que un actuar de las entidades reguladoras en ese momento habría minimizado los efectos del fraude financiero del grupo de Eduardo Monasterio. Sin embargo, hay algunos antecedentes que hacen suponer las causas de la actitud tomada por la defensa del Central y las otras reparticiones fiscalizadoras.

Eduardo Monasterio, si se caracterizaba por algo —además de ser un excelente jefe y de tener una verborrea envidiable— era de ser hábil en los negocios y políticamente.

Pese a ser un hombre simpatizante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), con vistas a consolidar su imperio financiero ingresando al negocio bancario en un futuro cercano, Monasterio fichó a dos reconocidos personajes de los gobiernos de la Concertación que acababan de dejar sus funciones públicas: el Demócrata Cristiano (DC) Julio Bustamante Jeraldo, ex superintendente de AFP, quien llegó a presidir la AFP Magister y la Isapre Vida Plena; el otro elegido fue el ex ministro secretario general de la Presidencia, el PPD Álvaro García Hurtado — cercano colaborador del presidente Ricardo Lagos— quien quedó como presidente de la compañía de seguros de vida Le Mans.

Tal vez la presencia de estas figuras y para evitar otro escándalo político como el caso MOP Gate es que se cometió el error de actuar con mesura en este caso, lo que quedaría en evidencia sólo un mes más tarde. Y el costo fue alto.

La defensa corporativa

Para evitar un descalabro mayor —y consciente de lo que podía venir— Eduardo Monasterio se apresuró en contratar al prestigioso abogado penalista Miguel Álex Schwaitzer, famoso entre otras cosas por defender al general (r) Augusto Pinochet mientras estaba detenido en Londres.

El jurista basó su defensa en que nadie del grupo estaba al tanto de que Enzo Bertinelli mantenía contacto con Pamela Andrada y, aún más, entregó a la policía los computadores de la oficina del ex gerente general argumentando que los mensajes que recibió Bertinelli eran personales, cadenas de chistes e información financiera plenamente conocida en el mercado.

Sin embargo, el propio Schwaitzer desconocía que el mismo día en que Bertinelli supo que había sido descubierto —el jueves 30—, encargó a Cristián Schultz —jefe de informática de Inverlink— y a José Torres, quien a veces prestaba asesorías de este tipo al grupo, que literalmente barrieran cualquier vestigio de sus contactos con Pamela.

Ambos técnicos hicieron muy bien su trabajo, tanto así que los expertos de la Brigada del Cibercrim de Investigaciones nunca pudieron establecer qué clase de informes recibió Bertinelli. Sin embargo, los registros de los correos electrónicos que salieron desde el Banco Central dan ciertas pistas al respecto.

Pero este trabajo les costó caro a ambos técnicos ya que los dos terminaron procesados por obstrucción a la justicia e infracción a la Ley Informática, lo que les valió una estadía de un mes en Capuchinos ⁷.

La caída de Bertinelli generó una crisis al interior del holding que rápidamente contrató los servicios de la empresa Hill & Knowlton Captiva para que los efectos en la imagen del grupo fueran lo más marginal posible.

Sin embargo, durante ese mes de febrero la cuenta regresiva para Inverlink ya estaba en marcha y las entrevistas que diariamente dieron sus principales ejecutivos —partiendo por el propio Monasterio y su gerente general, José Antonio Yañez— poco sirvieron. Como dato, un mal negocio hizo esta agencia de comunicaciones ya que —además del descrédito de defender a un grupo empresarial corrupto— sus servicios nunca fueron cancelados.

Posteriormente Inverlink contrató a la firma Estratégika, con la cual trabajó hasta que Monasterio se entregó a la justicia. Esta vez, la empresa cobró por adelantado poco más de un millón de pesos.

Mientras todo esto ocurría la confianza de los casi 56 mil inversionistas o ahorrantes que tenían sus dineros colocados en la corredora de bolsa, la consultora o los fondos mutuos de Inverlink se terminó de un día para otro y comenzaron a reclamar de vuelta sus inversiones...

⁷ Con fecha 13 de marzo de 2003 se sometió a proceso, en calidad de autores del delito previsto en el artículo 3° de la ley N° 19.223, sobre delito informático, a Cristián Schultz y a José Torres eliminado los correos electrónicos, enviados por Pamela Andrada a Bertinelli, de los sistemas informáticos de INVERLINK, ilícitos que ocurrieron después de interpuesta la querrela por parte del Banco Central e informada la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Otro dato de la causa, Miguel Álex Schwaitzer por segunda vez en su dilatada trayectoria dejó a uno de sus defendidos —en este caso el grupo Inverlink— el viernes 7 de marzo del 2003, el mismo día que Monasterio y compañía se autoinculpaba, ahora defendidos por el estudio del abogado Samuel Donoso, militante del PPD.

Eduardo Monasterio aseguró hasta su última aparición pública ⁸ que nunca el grupo Inverlink utilizó algún tipo de información privilegiada. Pero la suerte ya estaba echada y el hasta hace poco próspero holding se empezaba a caer a pedazos.

Y tal como ocurre cuando los barcos comienzan a hundirse, los marineros —en este caso buena parte de los ejecutivos de Inverlink— saltaron literalmente por la borda para salvarse.

Esto fue lo que hicieron Álvaro García y Julio Bustamante, quienes en medio de la crisis intentaron que Inverlink se querellara contra Bertinelli para dar una señal de transparencia al mercado. Y a la oposición política que ya reclamaba sus cabezas como “hombres de gobierno”. Monasterio se opuso a la idea argumentando su cercanía personal con su ex tercer hombre.

Ante la negativa del presidente del grupo y para proteger su imagen pública y sobre todo política, ambos renunciaron a pocas horas de destaparse el desfalco en Corfo. Pese a ello, ninguno de los dos salió ileso del escándalo.

⁸ Entrevista en Revista Capital publicada el 8 de abril del 2004

Desde el año 1999 Bertinelli mantuvo contactos con Pamela Andrada y fueron varios cientos los correos y llamadas telefónicas que intercambiaron. Ambos antecedentes están plenamente establecidos en el sumario que maneja el ministro Patricio Villarroel donde figura una extensa lista de llamadas desde la gerencia general de la corredora de bolsa Inverlink hasta el Banco Central.

Lo que —hasta ahora— no se ha podido establecer es si acaso el ex gerente general de la corredora de bolsa Inverlink recibió con anticipación las decisiones del Banco Central en sus intervenciones cambiarias ⁹.

Al parecer, estas políticas —que son muy poco frecuentes— las resolvía directamente Massad con dos de sus asesores más directos y nunca quedaba algún registro escrito. En todo caso, si Bertinelli hubiera conocido con anticipación estos datos habría podido especular con el precio del dólar recogiendo jugosas ganancias.

Aparece Enzo

A los pocos días de presentada la querrela criminal del Banco Central, Enzo Bertinelli apareció cerca de las 7 de la mañana —para evitar el asedio periodístico— en el Tribunal para testificar ante la jueza (s) Elizabeth Reinoso.

⁹ El Banco Central tiene como atribución salir al mercado a comprar o vender instrumentos financieros en dólares en el momento que estime que la moneda estadounidense ha superado los rangos de precio que permitan mantener los indicadores macroeconómicos del país.

Como era de suponer quedó detenido en el anexo Cárcel Capuchinos. Andrada, en tanto, se mantuvo prófuga unos días más hasta que su abogado, Rodrigo Ávila —quien forma parte del estudio del prestigioso penalista Hugo Rivera— informó al Tribunal que su defendida estaba hospitalizada en la clínica Psiquiátrica Santa Sofía, en el sector oriente de la capital, bajo un profundo cuadro depresivo. Inmediatamente la ex secretaria quedó con custodia de Gendarmería en el establecimiento mientras se recuperaba.

La Clínica Santa Sofía era conocida por recibir pacientes que “enfriaban” ahí procesos penales por causas de drogas. De hecho, recibía el mote de “Santa Movida”.

A las pocas horas de conocerse su paradero se produjo el primer interrogatorio de Andrada, el cual trajo una nueva sorpresa en el caso.

La ex asistente de Massad declaró en dependencias de este centro asistencial ante la jueza (s) Reinoso y su actuaria, Carmen Bravo, que había firmado la carta de su confesión engañada por Rodrigo Irrazábal y señaló que anteriormente había contratado los servicios del jurista para ver un robo del que había sido objeto su padre.

La mujer sostuvo que Irrazábal la presionó para confesar el delito que se le imputa. Asimismo, agregó que el abogado tenía una estrecha relación sentimental con ella.

La versión de Andrada inculpando a Rodrigo Irrazábal tuvo eco en la magistrada Reinoso que inició una investigación que nunca terminó en nada dado que Irrazábal fue sacado del caso a mediados de febrero por las

propias autoridades del Central, las que optaron por no abrir un nuevo foco de conflicto.

El jurista, sin embargo, siempre negó cualquier presión sobre Andrada o un vínculo sentimental que los uniera. “Sinceramente, hubiera preferido contratar una prostituta antes de meterme con ella”, afirma enfático Irrazábal ¹⁰.

Pese a sus descargos, las evidencias en contra de la ex secretaria eran demasiado evidentes por lo cual fue sometida a proceso y quedó detenida en el anexo Cárcel Capuchinos.

Tras 7 meses de reclusión y 7 intentos frustrados, Pamela Andrada, ex secretaria del ex presidente del Banco Central, Carlos Massad, y responsable de enviar datos reservados a Inverlink, salió en libertad bajo fianza de \$500 mil dada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 11 de septiembre de 2003.

La ex asistente salió del anexo cárcel Capuchinos a las 15:00 horas de ese día, demacrada, junto a su pareja, Félix Vargas.

Curiosamente, en el mismo recinto penitenciario estaba recluido Enzo Bertinelli, a pesar de que ambos tenían prohibición de mantener cualquier contacto, lo cual obviamente nunca se cumplió y ambos inculcados pudieron coordinar incluso personalmente sus defensas.

¹⁰ Entrevista personal con el abogado Rodrigo Irrazábal

Reunión de camaradas

Mientras Pamela Andrada estaba hospitalizada, un grupo de sus amigos cercanos, que aún no tenían muy claro el nivel de compromiso de la ex secretaria —la mayoría militantes de la DC—, se reunió a almorzar en un conocido restaurant del centro de Santiago para “hacer una colecta” y ayudar a la camarada pagar su defensa, en el supuesto de que esta filtración de antecedentes reservados tenía como única causa el tratamiento de su enfermedad.

Un amiga cercana de Pamela, militante DC, recuerda que cuando se aprestaba a salir de su oficina para dirigirse al punto de encuentro, recibió una llamada de un alto personero del partido, quien le recomendó que no se involucrara en este embrollo ya que, al parecer, había algo grande de por medio.

Lo cierto es que a la cita llegaron menos personas de las presupuestadas las que juntaron una cantidad “simbólica” que una cercana entregó posteriormente a la madre de Pamela, propietaria de una peluquería en el centro de Santiago.

Como un dato que a estas alturas puede resultar hasta anecdótico, en uno de los correos que envió Pamela a Enzo —con quien se reunía periódicamente en las mañanas en el Bar 27 ubicado en la calle Nueva York en el Centro de Santiago— le remitió el currículum de Félix Vargas para que le ayudara a encontrar trabajo.

Enzo Bertinelli obtuvo su libertad bajo fianza de 2 millones de pesos el 11 de marzo de este año. Al salir de la cárcel —en medio de un gran tumulto ya que ese mismo día obtuvieron su libertad Eduardo Monasterio e Ignacio Wulf— que estaba tranquilo y que en algún momento iba a aclarar mucha información. “ya vamos a hablar y van a saber muchas cosas”, dijo¹¹.

Sin embargo, Bertinelli optó por no hablar y mantener un perfil bajo. Todos quienes son los entendidos en el caso aseguran que Bertinelli no sólo era la mano derecha de Monasterio sino que era el hombre clave detrás de los fraudes del grupo Inverlink. Por ahora el ex famoso casablanquino intenta llevar una vida lejos de cualquier medio de comunicación y todas las mañanas va a dejar a sus hijos al Colegio Saint George como la hace cualquier apoderado.

El millonario estilo de vida

El lunes 3 de febrero del 2003 un desconocido Enzo Bertinelli Villagra llenaba las páginas de diarios y pantallas de TV al descubrirse que una secretaria del Banco Central, Pamela Andrada, le enviaba información clasificada del Ente Emisor vía e-mail.

Desde ese momento, el ex tercer hombre del grupo Inverlink contribuyó, sin quererlo, a que se destapara uno de los mayores escándalos

¹¹ El Mercurio, 12 de marzo de 2004.

financieros de Chile, que implicó un robo a la Corfo que superó los \$85.000 millones.

Pero este exitoso y discreto ejecutivo tenía un estilo de vida ostentoso que trae a la memoria los narcos colombianos. Dinero había en Inverlink y mucho. Según un informe de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de Investigaciones —que está en poder del juez Patricio Villarroel— Bertinelli gastó en enero del 2003, un par de semanas antes de que se destapara el escándalo, más de \$28 millones sólo en alfombras para su departamento en ubicado en la calle Carolina Rabat, en la comuna de Vitacura.

El ex ejecutivo conoció a fines de los 80 a Eduardo Monasterio cuando llegó a hacer la práctica profesional en el Chase Manhattan Bank, donde su mentor ya había hecho escuela.

Varios años después y pese a su origen humilde, le gustaba vivir bien y para ello no escatimaba en gastos.

Según el informe de la Brilac, el ex tercer hombre de Inverlink sacó de su bolsillo \$20.780.000 más para materiales de construcción y decoración de interiores, todos en enero del 2003. Bertinelli tenía varias cuentas corrientes en bancos de la plaza en las cuales entre 2001 y 2003 pasaron cerca de US\$1 millón, la mayor parte de los cuales la Brilac desconoce su origen y destino. Sin embargo, en el detalle figuran haciendo depósitos varias personas naturales, Inverlink Consultores y la sociedad de inversiones Resenit, que era de su propiedad.

En marzo del 2003, y desde la cárcel, este ejecutivo otorgó poderes legales a su esposa Angélica Peña Bosco y a su hermana Rossana Bertinelli, las que enajenaron en pocos días por cerca de \$120 millones las propiedades que tenía en Casablanca. Además se liquidaron los dos autos que tenía la familia Bertinelli: un Audi A6 Turbo y un Jeep Grand Cherokee. Entre ambos, el precio de venta supera los \$60 millones.

Los detectives encontraron la mayor parte de esta documentación en los allanamientos a las residencias del también ex gerente general de la corredora de bolsa Inverlink y luego fueron contrastados con información bancaria. Pese a ello, la policía civil está siguiendo el rastro de algunos depósitos realizados por el propio Bertinelli en un banco de origen suizo en operaciones en las que también habría participado el segundo hombre de Inverlink, Ignacio Wulf.

De hecho, en el informe se afirma que Wulf realizó un retiro desde esta cuenta en el extranjero por más de US\$75.000 en marzo del 2003, cuando ya se encontraba detenido en el Anexo Cárcel Capuchinos.

Capítulo II

La avalancha

La bola de nieve del escándalo Inverlink Banco Central empezó a crecer a medida que avanzaba el tiempo y a comienzos de marzo los ataques hacia el cuestionado grupo empresarial comenzaron a arreciar. El mismo Eduardo Monasterio señalaba a “El Mercurio” que los estaban reventando¹² y, de paso le daba las gracias públicamente al Banco Santander Santiago por seguir creyendo en él manteniéndoles las líneas de crédito.

Posteriormente se sabrían las razones de este aparente desinteresado apoyo de la entidad de origen hispano.

Al mediodía de ese caluroso viernes 7 de marzo del 2003 circulaban en las redacciones de periódicos y canales de TV un sinfín de rumores. Para los periodistas que reportaban el caso estaba claro que había algo grande pero nadie sospechaba la magnitud.

La corrida financiera que se había producido entre los casi 53.000 inversionistas y ahorrantes de las empresas del grupo Inverlink que, por temor, reclamaban para retirar sus dineros había generado una crisis de liquidez que el holding de Eduardo Monasterio no pudo soportar.

“Monasterio está preso”, era el dato que todos los reporteros tenían pero que nadie podía confirmar. Y nadie lo hizo, por los menos ese día.

¹² El Mercurio, 1 de marzo de 2003

Dos días antes, el miércoles 5 de marzo, Eduardo Monasterio sabía que la máquina lo había pillado y esta vez el hoyo que había dejado en Corfo era imposible de mantener oculto por más tiempo.

En ese momento analizó en frío los hechos y esperó hasta el viernes. Ese día junto dos de sus principales ejecutivos —Patricio Collarte y Eduardo Tapia— y al ex jefe de tesorería en Corfo, Javier Moya, decidieron “denunciarse” ante la magistrada del 32 Juzgado del Crimen, Blanca Rojas. Los cuatro delincuentes de cuello y corbata ingresaron a las dependencias del Tribunal ubicados en Av. España, en el Centro de Santiago, en horas de la tarde.

Reconocieron sin que se les moviera un músculo a la magistrada que habían vendido en el sistema financiero más de \$77.000 millones de pesos —después se estableció que la cifra superaba los \$85.000 millones— en depósitos a plazos que habían robado desde la tesorería de la empresa estatal.

En el expediente, que aún está sujeto al secreto de sumario, consta la siguientes declaraciones de Eduardo Monasterio, Patricio Collarte —alias el cortadedos— y Eduardo Tapia ¹³:

“Recibíamos la entrega en custodia de depósitos a plazo y otra clase de valores de acuerdo a la definición dada por el artículo 3° de la Ley de Mercado de Valores. Principalmente los hechos que se explicitan están referidos a títulos entregados en custodia por la Corfo y Le Mans Desarrollo Compañía de Seguros de Vida, y eventualmente de terceros.

¹³ Declaración judicial que consta en el expediente y que aún está protegida bajo el secreto del sumario.

Se dispuso la venta de los valores recibidos en custodia, tanto para resolver problemas de pérdidas producidas en operaciones realizadas por el grupo, como para financiar la adquisición de determinados activos, como en el último tiempo para resolver la corrida de inversionistas que afectó a la Corredora Inverlink.

Hacemos especialmente presente que siempre actuamos con el ánimo de evitar daños a terceros, sin ánimo de lucro personal, y con la intención, tras estas operaciones, de recuperar las pérdidas a través de la obtención de ganancias en los negocios y operaciones que se emprendían, con las cuales poder superar los déficit y así restituir los valores a quienes los habían entregado en custodia. De hecho, gran parte de los perjuicios que en principio se generan a las víctimas del ilícito penal que se denuncia, serán posteriormente reparadas vía la venta de valiosos activos que el grupo posee, tales como la AFP Magíster, la Isapre Vida Plena, la Clínica Las Lilas, Le Mans Desarrollo Compañía de Seguros de Vida S.A. y los proyectos tecnológicos en que ha invertido el grupo.

Los montos a que ascienden los valores cuya venta hemos efectuado y dispuesto de sus fondos en los objetivos financieros ya descritos, aproximadamente alcanzan a las siguientes cifras: a la Corfo \$75.000 millones (...) no tenemos un cálculo claro de la situación de otros terceros. Los valores referidos son aproximados, ya que no hemos logrado realizar un balance exacto de las cifras involucradas, pero resultan muy cercanas a las referidas.

Por último en la medida que se ha afectado a una institución pública como la Corfo, hechos en los cuales se deberá investigar la eventual responsabilidad del funcionario público don Javier Moya, quien recibió, desde 1999 hasta esta fecha, la cantidad aproximada de \$150 millones de parte del grupo Inverlink por su cooperación, cuya conducta podría entenderse respecto de éste la comisión del ilícito penal de fraude al fisco”.

En una clara demostración de coordinación de las defensas, en esa misma oportunidad Javier Moya Cucurella declaraba:

“Actualmente (marzo de 2003) me desempeñé como jefe de Tesorería de la Corfo, teniendo a mi cargo la inversión y custodia de las colocaciones en instrumentos financieros de dicha institución....

En el ejercicio de esas funciones durante el año 1993 y posteriormente desde 1999 a la fecha operé con la Corredora y la Consultora del grupo Inverlink, quienes actuaban a través de sus encargados de la mesa de dinero, señores Eduardo Tapia Donoso y Patricio Orlando Collarte López.

Nunca hubo una dificultad con esas instituciones financieras, a quienes compraba para Corfo instrumentos financieros de renta fija y a largo plazo, dejándolos en custodia de la empresa vendedora, en sus oficinas de Avenida Apoquindo 4.775, piso 21, comuna de Las Condes. Ello porque siempre se cumplían los pactos y pagos a la fecha de los respectivos vencimientos de los instrumentos financieros entregados en custodia.

En el curso del presente año las entidades del Grupo Inverlink tienen en su custodia, de acuerdo al procedimiento descrito precedentemente, el equivalente a \$35.000 millones, en pactos y depósitos con plazos pendientes.

En el curso de la investigación que US. deberá ordenar tendrá que precisarse el monto exacto de esos instrumentos financieros.

Posteriormente y con motivo de la denuncia y querrela interpuestas por el Banco Central de Chile en contra de personeros del grupo Inverlink por robo y mal uso de información privilegiada, de que conoce actualmente el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricio Villarroel Valdivia, se produjo una desconfianza general en el ámbito financiero en contra de las sociedades vinculadas al grupo señalado, lo que pasó una corrida general de inversionistas y ahorrantes.

Esta circunstancia extraordinaria causó una total falta de liquidez del grupo Inverlink, que carecía de los recursos suficientes para hacer frente a la señalada corrida.

Con motivo de lo anterior y como una forma de paliar lo mismo Eduardo Monasterio Lara y Eduardo Tapia Donoso se entrevistaron conmigo manifestándome que era indispensable entregar liquidez a dichas empresas, pues en la forma en que la situación se estaba desarrollando había sido necesario disponer de los depósitos a plazos señalados en el párrafo 4 que antecede. Me señalaron, además, que para salir de esta situación y recuperar los instrumentos financieros de Corfo que tenían en

custodia, debían seguir operando en el mercado para revertir esta crisis y restituir lo perdido.

La noticia referida me causó estupor y, dentro de mi nerviosismo ante la gravísima responsabilidad que veía tener que enfrentar, fui convencido que la única manera de solucionar la situación creada era proporcionar la liquidez que era requerida para solucionar problemas que aparecían como puntuales del grupo Inverlink. Ello porque dicho Grupo tenía valiosos bienes e inversiones, que liquidados en forma inteligente, eran más que suficientes para afrontar la recuperación de los títulos de renta fija de Corfo que se habían perdido.

Convencido lo anterior, en el mes de febrero recién pasado hice un depósito a plazo de \$10.000 millones a nombre de Corfo, que entregué en custodia a la Corredora Inverlink, y, posteriormente otros depósitos por aproximadamente \$15.000 millones; 12.000 millones y \$ 5.000 millones.

En el día de ayer, 6 de marzo de 2003, se me informó que todos estos depósitos a plazo y/o títulos de renta fija de Corfo entregados en custodia a la corredora y/o Consultora del grupo Inverlink habían sido liquidados en el mercado secundario y su producto pagado a diversos acreedores de ese grupo, por lo cual no había ninguno en custodia, sino se había dispuesto de los mismos, lo que constituye, por parte de los personeros del grupo Inverlink que participaron un flagrante delito de apropiación indebida, por un monto aproximado de \$77.000 millones en perjuicio de la Corfo.

Por mi colaboración con las empresas del Grupo Inverlink recibí de éstas, durante el período comprendido entre 1999 y esta fecha, una suma que pienso puede ascender a unos \$150 millones, la cual no estoy en condiciones de determinar con precisión''.

Tal fue la impresión de la jueza Rojas que, en una decisión que le costó más de una crítica de sus pares, inexplicablemente los dejó en libertad sólo con una citación para el martes siguiente.

Capítulo III

La jarrón perdido

Dos días enteros tardó la Corfo en reaccionar ante la información de que algunos de sus documentos estaban siendo inusualmente transados en el mercado. Otros cinco días le llevó al Presidente Ricardo Lagos comprender de qué se trataba el desfalco. Tiempo precioso que después le pasaría la cuenta al mandatario.

La ignorancia respecto de cómo opera el sistema financiero de parte de su yerno Gonzalo Rivas, llevó al Mandatario a cometer un error descomunal con su alegoría del jarrón, que hizo temer la caída del mercado de capitales.

Y claro, el miércoles 6 de marzo se entera el vicepresidente de Corfo, Gonzalo Rivas, de que existen depósitos a plazo de Corfo que se están transando irregularmente en el mercado.

Durante las primeras 36 horas, el caso es analizado únicamente en el organismo estatal. Pero el pronóstico es benevolente: se cree que los documentos robados son pocos, que el dinero involucrado es mínimo y que, en todo caso, podrá ser recuperado sin mayor trámite.

En la tarde del jueves, Rivas le informa al entonces superintendente de Valores y Seguros, Álvaro Clarke, y por la noche al ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi. A ambos les asegura que existe un

problema en la transacción irregular de papeles Corfo en el mercado de capitales, pero deja en claro que todo está bajo control.

Tan relajado está Rivas que acude a la despedida de Heraldito Muñoz —quien dejaba la vocería del gobierno para partir como embajador ante la ONU— en el restaurante “El Parrón”, donde se encuentra con el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre. Cero preocupación hasta ese momento.

El viernes en la mañana Rivas y Rodríguez Grossi se encuentran en una reunión en la Corporación de Investigación Tecnológica de Chile, Intec. Están ahí también el subsecretario y los jefes de servicio del Ministerio de Economía. A media mañana, el vicepresidente de Corfo recibe una inesperada llamada a su celular. Era un conmovido Álvaro Clarke. La situación se ponía color de hormiga.

Y no era para menos ya que el superintendente tenía las peores noticias que hubiera podido imaginar Rivas: el problema es masivo, son varios los depósitos a plazo faltantes que se están transando en el mercado, el robo alcanza a poco menos de 80 millones de dólares, según esas primeras investigaciones ya que aún se desconocía el total de los documentos involucrados, que en verdad superaría los cien millones de dólares.

Antes de partir de la reunión, la primera opción que se discute es acudir a tribunales y enfrentar a la prensa. Sin embargo, ya es tarde.

La falta de diligencia por parte de Corfo en las primeras 48 horas desde que se conoció el desfalco dieron tiempo al dueño de Inverlink, Eduardo Monasterio, para mover decenas de millones de dólares y a Javier Moya, el operador de Corfo, para sacar 70 millones de pesos de sus cuentas bancarias, particularmente de una que tenía en el Banco de Crédito e Inversiones (BCI).

El terremoto ya era grado siete y comenzó a remecer los cimientos del edificio de Teatinos 120 del ministerio de hacienda. El jefe de presupuestos, Mario Marcel, y el superintendente Álvaro Clarke visitan a Nicolás Eyzaguirre y le informan del robo de documentos.

El viernes por la tarde Gonzalo Rivas se reúne con Ricardo Lagos y le explica la situación. El Presidente se indigna porque entiende que éste será un nuevo escándalo político, aunque jamás intuye que puede tratarse del peor descalabro económico de los últimos años, sólo comparable del “Davilazo” en Codelco de comienzos de los noventa.

En verdad Rivas no comprende cómo se mueve el mercado de capitales y está convencido de que judicialmente se establecerá que el operador de la mesa de dinero se excedió abusivamente en sus atribuciones.

El yerno de Lagos pensaba que esa sola comprobación impediría el cobro de dichos documentos y, por tanto, Corfo no sufriría la pérdida de su dinero. Con esta tesis, Rivas minimiza el impacto del robo y convence a su suegro.

A pesar de ser abogado y economista, el Mandatario también desconoce cómo opera el sistema financiero y cree a pie juntillas en la versión de su yerno.

Por la noche, la cúpula de la Corfo se reúne a discutir el tema, donde la tesis de la recuperación de los fondos sigue en pie. La cita de una de las oficinas del octavo piso del edificio ubicado en Moneda 921 estaba encabezada por Gonzalo Rivas, el fiscal de la entidad Bernardo Espinosa y la gerente de administración y finanzas, María Isabel Pinochet, superior directo de Javier Moya. Sólo una vez que se tiene certeza de que la prensa sabe del caso, se decide hacer un comunicado, eso de las 21 horas.

El golpe abrió el noticiero de TVN. El Diario Financiero, que habitualmente cierra su edición de los días lunes la noche del viernes la postergó 24 horas guardando la portada.

Ese sábado antes de las diez de la mañana Gonzalo Rivas en compañía del fiscal Bernardo Espinoza entran a las dependencias del Segundo Juzgado del Crimen a estampar una senda querrela contra Javier Moya, Eduardo Monasterio e Ignacio Wulf.

En forma paralela, se solicita una medida precautoria que impida la venta de todos los documentos de la Corfo —por un total de \$85.000 millones— que Inverlink había vendido en el mercado de capitales y que estaban en poder de bancos, AFP y compañías de seguros. El juez concede la precautoria.

El sábado 8, en la Radio W, Lagos transmite al público lo mismo que le ha explicado su yerno: “Hubo un intento de robo, pero no se robó. O sea, los \$85.000 millones de pesos que están depositados en los bancos siguen siendo de Corfo. De manera que acá no se ha perdido ni un peso del Estado de Chile”.

En ese momento los actores del mercado de capitales comienzan a estremecerse. De hecho, ese día sábado 8 se reúnen para tratar el tema Juan Claro, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio y Hernán Somerville, titular de la Asociación de Bancos. Este último tenía muy claro lo que podía ocurrir...y que finalmente sucedió. Una corrida financiera. De esa reunión lo único que se sacó en limpio era que los intereses privados se iban a defender en forma corporativa.

En forma paralela, el equipo económico del Gobierno también se inquieta. Eyzaguirre inicia una seguidilla de reuniones, recibiendo a Gonzalo Rivas, al consejero y al gerente general del Banco Central, José de Gregorio —ex ministro de Economía del presidente Eduardo Frei— y Rodrigo Valdés, respectivamente.

Tal vez este último era el único que en ese momento sabía que el Presidente se había equivocado dando una mala señal al mercado

Álvaro Clarke —quien es partidario desde el principio de que los depósitos se paguen— también lo visita, al igual que el superintendente de Bancos,

Enrique Marshall. El ministro de Hacienda se reúne igualmente Juan Claro y Hernán Somerville.

El domingo 9, mientras continúan los contactos entre Hacienda y el sector privado, Eyzaguirre se reúne con Lagos y con los más cercanos asesores económicos del Mandatario: el presidente de TVN y consejero del BancoEstado, Marco Colodro; Máximo Pacheco, el presidente del Metro, Fernando Bustamante y el ministro de Economía, Jorge Rodríguez, quien a esa hora ya veía temblar su puesto.

Tímidamente, el vicepresidente de Corfo admite por primera vez ante la prensa que es posible que la entidad puede perder el dinero.

Pero el Presidente no se da por satisfecho y reitera que Corfo no debe asumir la pérdida. Ese domingo por la noche se reúne con su comité político —formado por los ministros Eyzaguirre, José Miguel Insulza, Francisco Vidal y Francisco Huenchumilla— para discutir por primera vez el caso, llegando a la conclusión inicial, que se suponía resguardaría mejor la imagen gubernamental, de que el Estado no perdería sus recursos.

El lunes, convencido de que ése es el mejor camino, Lagos, muy en su didáctico estilo de profesor básico, improvisa en el matinal de Canal 13 la alegoría del jarrón, remeciendo definitivamente el mercado de capitales.

"El que compra algo ajeno sin los debidos resguardos, pierde plata. Es tan elemental como eso. Es como si entran a mi casa, me roban el jarrón

y después lo llevan a un reductor (que es el papel de Inverlink), y después lo descubren. Obviamente lo voy a recuperar, porque el jarrón es mío", le afirma al periodista Alejandro Chávez.

Ahí nace la célebre teoría del jarrón. Por la tarde, el ministro Eyzaguirre intenta infructuosamente convencerlo de que está equivocado y de que se puede provocar una temida corrida de los depositantes de fondos mutuos.

A tanto llega la discrepancia, que el Presidente grita indignado. El ministro, que es un experto en el mercado de capitales, no se atreve a quitarle el piso a su jefe, alargándose la tensión para el sector privado. Eso sí, contra su primera decisión y con profundo dolor, el Presidente acepta la renuncia de Rivas a la Corfo.

Según reconociera públicamente después Ricardo Lagos Weber, hijo del presidente, este fue el momento más complejo en lo personal que ha debido enfrentar el mandatario desde que llegó a La Moneda.

Pero en cuanto a los dineros, se mantiene el mismo tenor argumental. De hecho, el martes, en una entrevista de "La Segunda"¹⁴, Insulza insiste que "no pueden pedir, invocando la tranquilidad de los mercados, que el Gobierno salga a decir 'sí, vamos a pagar' y entregar varias decenas de miles de millones de pesos".

¹⁴ La Segunda, martes 10 de marzo del 2003.

Pero ese día ya está clara la semiparalización del sistema financiero, se conocen los primeros indicios de la temida corrida desde los fondos mutuos —con cientos de ahorrantes que insisten en rescatar su dinero y que finalmente significa la salida de cerca de 700 millones de dólares del mercado en 48 horas — y el aumento sostenido en el índice del riesgo país.

Entre el lunes 10 y el jueves 14 de marzo del 2003 la industria de fondos mutuos perdió aproximadamente US\$ 1.800 millones de patrimonio, lo que representa 30% del patrimonio que administraba a esa fecha.

Los fondos afectados fueron de corto plazo¹⁵, fondos de empresas, mientras que los fondos mutuos que son de personas, que generalmente son de mediano y largo plazo¹⁶, casi no vieron impactados sus patrimonios.

Ante este alarmante situación, ese mismo día martes en una nueva conversación con sus ministros en donde está el ministro de Justicia, Luis Bates. El Presidente termina por aceptar los efectos jurídicos de los documentos de Corfo que han sido transados y cómo funciona el sensible mercado de capitales, optando por seguir la opinión del equipo económico y dejar de lado la opción comunicacional del equipo político.

Forma un comité de crisis con los ministros Eyzaguirre, Rodríguez y Bates, su asesor Marco Colodro y el renunciado Gonzalo Rivas.

Recién ahí se empezó a destrabar el problema, para llegar a la solución intermedia que se sellará el miércoles 12 a mediodía: la Corfo

¹⁵ Instrumentos de inversión en renta fija colocados a un plazo inferior a 30 días.

¹⁶ Instrumentos de inversión en renta fija colocados a un plazo entre 90 días y varios años.

acepta alzar las medidas precautorias, permitiendo el pago de los depósitos a plazo a los bancos poseedores de los documentos. Estos mismos bancos por su parte firmarían una carta garantizando la devolución del dinero a Corfo, si la justicia determina que los depósitos nunca dejaron de ser de Corfo o que actuaron de mala fe. Ese día Somerville sale sonriente de las oficinas de Eyzaguirre con un nuevo logro bajo el brazo para exhibir en su gremio.

***“Son los jefes las personas que deben velar por el cumplimiento de las
normas preestablecidas”***

Javier Moya
Declaración judicial el 3 de marzo de 2004
Siete días después obtuvo su libertad bajo fianza

Capítulo IV

Ruedan las cabezas

Por la tarde de un caluroso 5 de febrero un visiblemente afectado Carlos Massad ingresaba lentamente en las dependencias del Segundo Juzgado del Crimen acompañado del fiscal del banco Miguel Ángel Nacrur. El objetivo de la máxima autoridad del Central era declarar ante la magistrada (s) Elizabeth Reinoso ya que 48 horas antes había firmado la querrela para que se investigara la fuga de información desde su propio computador.

A la salida de este trámite que se prolongó por cerca de 40 minutos, señaló una frase que daba luces de que sus días a la cabeza del Central estaban contados: “Cometí el error de escoger una mala secretaria”¹⁷.

Pese a que el titular del ente Emisor optó por despejar cualquier duda al declarar personalmente ante la jueza —por su condición podía entregar una declaración de oficio— en esferas políticas del partido Demócrata Cristiano estaba claro que Massad tendría que dejar su puesto.

Sin embargo, el momento de la dimisión tenía que darse cuando el ambiente político estuviera más descomprimido para evitar que el impacto de la crisis fuera aún mayor en los mercados bursátiles locales y, adicionalmente, la imagen y riesgo país de Chile no se vieran dañados en los mercados externos.

¹⁷ Diario Financiero, 6 de febrero de 2003

Posteriormente se produjo otro quiebre interno en la DC, que finalmente gatilló la salida de Massad el 31 de marzo del 2003.

La magnitud del escándalo, sobre todo luego de conocerse el fraude en la Corfo, salpicó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y por ende a su titular, el también DC Álvaro Clarke.

Desde el primer día que se conoció el tema de la fuga de información Banco Central la SVS destinó a 8 inspectores para que fiscalizaran en terreno todas las operaciones de Inverlink corredores de Bolsa y la compañía de seguros Le Mans. Sin embargo, estos funcionarios no fueron capaces durante esos 30 días de detectar la magnitud de los fraudes que se estaba cometiendo, lo que evidentemente puso en tela de juicio la labor de Clarke, a quien también se le criticaba que en medio de la crisis en febrero no suspendió sus vacaciones.

Lo cierto es que la SVS y el Central se enfrascaron en una dura polémica pública que se generó durante el trabajo de la comisión investigadora del caso Inverlink de la Cámara de Diputados.

La instancia parlamentaria, presidida por el diputado DC Jorge Burgos, citó a declarar a las máximas autoridades de ambas entidades las que comenzaron a deslindar responsabilidades una en la otra.

La SVS —partiendo por Álvaro Clarke— señaló a los diputados ¹⁸ que el Central no había entregado de forma diligente todos los antecedentes que

¹⁸ Declaraciones del entonces superintendente de Valores y Seguros Álvaro Clarke a la Comisión Investigadora Caso Corfo Inverlink de la Cámara de Diputados.

manejaba del caso Inverlink, lo que fundamentalmente estaba referido a los correos electrónicos que enviaba Pamela Andrada a Bertinelli.

La SVS argumentaba que sin esos antecedentes era virtualmente imposible establecer si la corredora de bolsa del grupo utilizó información privilegiada para ganar dinero en el mercado bursátil.

En su descargo, las autoridades del Banco Central —como Carlos Massad, Camilo Carrasco y Miguel Ángel Nacrur— argumentaban que no era labor del ente emisor fiscalizar a Inverlink, función que recaía en la SVS.

El campo de batalla de estas dos entidades terminó siendo el Edificio Eduardo Frei Montalva, sede de la DC.

Mientras el grupo de los colorines —sector de la DC partidarios del presidente de la colectividad Adolfo Zaldívar— respaldó a uno de sus jóvenes economistas cerrando filas con Clarke, Massad recibió el respaldo interno de los panzer de la DC como el ex presidente Patricio Aylwin y el senador Gabriel Valdés.

Y el costo fue elevado. El primero en dar un paso al costado fue Massad, quien una tarde gris del 31 de marzo del año pasado cruzó la plaza de la Constitución hasta La Moneda. Tras permanecer casi 30 minutos en el despacho del presidente Ricardo Lagos, salió cabizbajo a enfrentar a los periodistas del sector a quienes anunció que en 30 días dejaba su puesto.

El equipo político del presidente Lagos ya había hecho sus cálculos y, ante todo, había que descomprimir el ambiente político, sobre todo en un escenario donde la derecha iba a cuestionar a cualquier candidato que

propusiera el Ejecutivo al Senado para presidir el Banco Central y sacar así el mayor provecho electoral de la situación.

Se manejaron varios nombres concertacionistas —como Manuel Marfán, Ricardo Ffrench Davis o José De Gregorio— pero ninguno tenía el piso político.

Por ello La Moneda optó por acallar las bocas en los partidos de la Alianza y proponer a Vittorio Corbo, un prestigioso economista y académico simpatizante de la derecha pero no militante. Pese a que la postulación despertó resquemores en las filas concertacionistas finalmente el Senado aprobó la nominación de Corbo.

En la otra vereda poco tiempo duró la cuenta alegre de Clarke. Derribar a un personaje de la importancia de Carlos Massad claramente no le saldría gratis. Esta victoria a lo Pirro quedó sellada cuando apenas 12 días después Clarke entraba caminando por la puerta principal del edificio de Teatinos 120 y subía hasta el piso 8 donde lo esperaba un ansioso Nicolás Eyzaguirre.

Cuando Álvaro salió de esa oficina ya no era el superintendente de Valores y Seguros.

Pocos minutos después de las cuatro de la tarde sonaba el teléfono de la oficina más importante de la superintendencia de AFP. El mismo Eyzaguirre llamó a Alejandro Ferreiro, regulador de esta industria —única actividad comercial en la que participaba el grupo Inverlink en la que no pudo cometer fraudes debido a la buena regulación existente y a la atenta labor de la super—, reconocido en el mercado por la mano dura a la hora

de fiscalizar y excelentes gestiones regulando a las AFP y anteriormente a las isapres.

El puesto de superintendente de Valores y Seguros ya tenía dueño. Ferreiro, abogado de la Universidad de Chile con postgrados en Economía, cumplía con las tres condiciones que el gobierno y sobre todo Eyzaguirre requería: era DC con la cual se respetaba el cuoteo político; era reconocido y respetado por el mercado y, por último, su eficiencia estaba fuera de toda discusión

La Moneda estaba consciente de las susceptibilidades que despertaría en la DC su determinación de prescindir de Clarke, una de las principales cartas del presidente del partido, Adolfo Zaldívar; por eso se la comunicaron antes que al propio afectado.

El "colorín" lo había nombrado representante de los profesionales jóvenes de la colectividad. Fue el ministro del Interior, José Miguel Insulza, el encargado de avisarle en la noche del miércoles que la gestión de su "delfín" estaba en tela de juicio, y que era mejor que renunciara a que lo tuvieran que despedir.

Zaldívar "golpeó" a Clarke con la noticia en la mañana del jueves: hasta entonces el personero no tenía indicios de que Eyzaguirre le había quitado el piso político. Sin embargo, ya hace días circulaba el insistente rumor de su salida.

Aunque cercanos aseguran que en algún momento le manifestó que el Partido Socialista quería compensar con su cabeza la salida de Gonzalo Rivas, el yerno del Presidente, de la vicepresidencia de Corfo.

Sólo entonces Clarke supo que no tenía opción. Su jefe no gastaría capital político para salvarlo, como hizo Eduardo Aninat con su antecesor, Daniel Yarur, cuando en 1997 se desató el caso "Chispas" y llovieron los cuestionamientos a la capacidad fiscalizadora de la SVS.

En la DC empezó a prender entonces la convicción de que esta “renuncia inducida” era una maniobra del Gobierno para frenar la estrategia de Zaldívar, en cuanto a que la DC separara aguas del PPD y el PS en el nivel de involucramiento en los casos de sobresueldos, coimas y corrupción que se heredaban de los casos “indemnizaciones” y “Gate”.

Se interpretó como una forma de equilibrar a los "tragados" desde sus filas por el pantano de los escándalos: Carlos Cruz y Gonzalo Rivas entre otros, a los que suman la abrupta salida por esos días de Germán Correa del plan de Transportes por discrepancias con las autoridades del sector. Mientras que en la DC la única baja renombrada a la fecha era Massad, ya que el ministro de Economía, Jorge Rodríguez, logró zafarse de la acusación constitucional con la que lo amenazó la derecha cuando recién se destapó el caso Inverlink.

A modo de descargo, al otro día de haber renunciado, Clarke manifestó a los periodistas que él sintió que como era mucha la crítica a la

SVS, en relación a su rol en el caso Inverlink, asumió que los dardos apuntaban a su persona, y a través de él a Zaldívar. Así es que lo mejor que podía hacer era renunciar, a fin de descomprimir las presiones sobre la SVS.

En la misma línea, rebatió los argumentos de que tenía que correr la misma suerte de Massad y Rivas: "No son comparables las responsabilidades. En el BC hubo filtración de información privilegiada durante dos años y la Corfo perdió \$85.000 millones, ahí cabía exigir todas las responsabilidades en la línea de mando. En cambio nosotros descubrimos el fraude a la Corfo, la financiera informal, apagamos un incendio en tiempo récord y el trabajo de los últimos dos meses fue intachable''¹⁹.

También descartó que su cabeza haya sido sacrificada a petición del sector privado. Aseguró haber aclarado un impasse con la Asociación de Bancos, que en una carta —enviadada el 9 de abril los gerentes generales de todos los bancos de la plaza con copia al ministro Eyzaguirre—, manifestó su malestar por supuestas filtraciones desde la SVS, que vinculaban al sistema financiero con las operaciones de Inverlink.

¹⁹ El Mercurio, 12 de abril de 2003.

Lo que fue corroborado por su presidente Hernán Somerville, quien descartó presiones en ese sentido: "Este es un gremio serio y no actuamos de esa forma", dijo en ese momento²⁰.

Sin embargo, esta carta fue el golpe de gracia para Clarke y, de paso, Somerville volvió a mostrar su muñeca.

²⁰ Ibis

Capítulo V

Los responsables

A pesar de que era socio de una de las empresas que estuvo involucrada en una de las mayores estafas de la historia chileno, Ignacio Wulf Hitschfeld ha permanecido siempre en las sombras. A estas alturas pocos se acuerdan que él, junto a Eduardo Monasterio Lara, controlaba en partes iguales el 60% del holding Inverlink.

En 1991, Wulf fundó este grupo de empresas junto a Monasterio, sin embargo mientras el primero camina tranquilamente por las calles sin que nadie lo reconozca o recuerde que estuvo un año tras las rejas, el segundo incluso a recibido el mote de “El Padrino”.

Ambos fueron los responsables directos del sostenido crecimiento del conglomerado que llegó a controlar la corredora de bolsa Inverlink, la AFP Magíster, la Isapre Vida Plena, la compañía de Seguros Le Mans, la Clínica Las Lilas y las tecnológicas Intralatina y Ultratech.

Pese al bajo perfil siempre fue la opción de Wulf, incluso cuando el éxito de los negocios situaba en la cúspide financiera a este ingeniero comercial de la Universidad Católica originario de Puerto Octay en la ribera del lago Llanquihue.

Al interior del grupo Inverlink era sabido el pacto que tenía con “Lalo”, quien además estaba casado en segundas nupcias con su prima hermana, Eliana Newman. Ante la opinión pública la cara siempre fue la de

Monasterio, situación que tampoco incomodaba a éste último, quien gustaba de ostentar.

Así, mientras Monasterio se caracterizaba por ser hiperquinético, extravertido y alegre, Wulf es un hombre reflexivo y de poca vida social. El hecho es que la combinación de ambos caracteres funcionó maravillosamente desde 1991, año en que formaron Inverlink con un capital inicial de US\$ 300 mil.

Wulf, al igual que Monasterio, era dueño de Inverlink a través de la sociedad Surandes Inversiones y Asesorías, constituida en 1984 junto a José Valdivieso. Tenía una vasta experiencia de más de 20 años en el mercado financiero. En 1978 el grupo Comandari García lo reclutó entre sus filas como ejecutivo del desaparecido Banco del Pacífico, en donde desempeñó funciones de asesoría a la presidencia.

Dos años antes de crear Inverlink salió del banco cuando lo compró Carlos Cardoen, quien luego lo transferiría al grupo español Banesto en 1991.

Desde 1998, en conjunto con su señora Netti Werner y sus hijos, Wulf mantuvo la sociedad Interandes que realiza asesorías profesionales en la administración de empresas y negocios.

Según sus cercanos en Inverlink, el socio más desconocido del ahora quebrado grupo se preocupó siempre de poner la nota cuestionadora, más cerebral y menos apasionada en los negocios de la compañía. Ello, lejos del ímpetu y la impulsividad que siempre caracterizó a Monasterio. Además,

estuvo alejado del área propiamente financiera, para concentrarse en los temas legales del holding. Quienes han negociado con él afirman que es un hombre serio, que habla muy poco y tiende a moderar conflictos. "Es una persona discreta, prudente, componedora de situaciones. El típico alemán", señala una fuente que compartió directorios con el ejecutivo.

El mismo hecho de que manejara al dedillo todos los antecedentes legales del grupo es uno de los elementos que hace materialmente imposible que Ignacio Wulf no conociera el alcance de los negocios oscuros de Inverlink.

Sin embargo, a diferencia de Monasterio que optó por autoinculparse, Wulf nunca ha reconocido responsabilidad penal en los hechos. Incluso, el día que se despató el gran fraude a la Corfo (7 de marzo del 2003) concurrió personalmente a las oficinas del superintendente de Valores y Seguros Álvaro Clarke y le reconoció a la autoridad que en una reunión del directorio de Inverlink Monasterio había reconocido este millonario "pasivo". Después de hablar con Wulf Clarke llamó a Gonzalo Rivas.

Finalmente Wulf fue procesado por los mismos delitos que Eduardo Monasterio y, penalmente, enfrentan el mismo escenario como socios igualitario en el holding. Un año de estadía en la cárcel fue el corolario de la historia Inverlink de Ignacio. Primero en el anexo Pedro Montt de la Ex Penitenciaría y posteriormente, Capuchinos.

La relación entre Monasterio y Wulf se quebró al destaparse el escándalo. Nunca más se volvieron a hablar e incluso sus defensas han tratado de culparse mutuamente de la autoría intelectual de los ilícitos.

Hoy, Wulf no tiene casa propia, vive en un departamento arrendado junto a su mujer Natti , y es mantenido por sus hijos, ejecutivos con buenos puestos en el mercado. Quienes frecuentan los tribunales de justicia suelen encontrarse con un Wulf más delgado y canoso que va a firmar su libertad bajo fianza cada cierto tiempo en las dependencias del Segundo Juzgado del Crimen. Lo curioso es que muchas veces se ha topado en este trámite con su ex socio con el cual ni siquiera cruza la mirada.

La política

A pesar de que tanto Eduardo Monasterio como Ignacio Wulf eran hombre reconocidamente de tendencia derechista en la arena política —muy cercanos a la Unión Demócrata Independiente (UDI)— ambos tuvieron un manejo notable de sus contactos a nivel de gobierno. Claro, mientras duró el espejismo de transparencia que trataba de mantener el grupo de empresas.

El holding Inverlink intentó mantener vínculos estrechos con el principal partido de la alianza. De hecho, el abogado que los asesoró en un hasta antes desconocerse la magnitud del fraude que habían cometido fue Miguel Alex Schweitzer, jurista públicamente partidario del ex dictador Augusto Pinochet.

Incluso, el propio Monasterio realizó asesorías financieras a los municipios de alcaldes de la colectividad de oposición. Otro punto que relaciona a Inverlink con la colectividad de derecha es que por años trabajaron con un estudio de abogados vinculado a la UDI.

Públicamente, el holding siempre estuvo ligado ha a la Concertación, sobre todo luego que se incorporaran Julio Bustamante y Álvaro García, como directores y luego como accionistas. El objetivo detrás de estas incorporaciones no era otro que blanquear la imagen del grupo y, así, estrechar vínculos con la coalición de gobierno, probablemente con el objetivo final de allanar la obtención de una licencia bancaria.

Los rostros “públicos” de Inverlink

Cuando estalló el caso Inverlink, el ex ministro de Economía y Secretario general de la presidencia, Álvaro García Hurtado, tomó una decisión difícil: renunciar a las filas del PPD para defenderse como pudiera de lo que iba a venir sobre él.

García hasta antes de este capítulo era uno de los hombres mejor evaluados al interior de la colectividad, tenía gran empatía con la opinión pública y una mejor llegada en La Moneda. Sin embargo, su paso por el cuestionado grupo lo transformaron en una piedra en el zapato para el "partido de las denuncias" e incluso algunos correligionarios se tiraron en picada contra él.

El ex ministro lo pasó mal. Poco tiempo después de salir del gabinete presidencial ingresó a las filas de Inverlink como el flamante presidente de

la compañía de seguros de vida Le Mans. Posteriormente, pasó a tener una parte minoritaria de las acciones del grupo.

Era uno de los cercanos a Monasterio. De hecho, su oficina estaba en el mismo piso 21 de la torre Apoquindo. Todo iba bien hasta ese fatídico email de Pamela Andrada. Y el escenario del caso MOP Gate —con una oposición buscando con lupa cualquier acto de corrupción que involucrara concertacionistas— tampoco le ayudó.

La investigación que tiene a su cargo el juez Patricio Villarroel no estableció ningún elemento que vinculara delictualmente a García con sus ex jefes. Salvo uno, el gran error del ex ministro que le significó ser procesado como cómplice de estafa. Aunque por poco tiempo, ya que frente a la apelación de su abogado, Dávor Harasic, su encausamiento fue anulado en la Corte Suprema.

En realidad los errores fueron dos simples llamadas que realizó García al alcalde de Viña del Mar, Jorge Kaplán. Lo particular es que éstas se produjeron a mediados de febrero del 2003, en medio de la crisis de confianza de los inversionistas de Inverlink luego de conocerse la fuga de información desde el Banco Central.

El Municipio de Viña del Mar tenía invertidos en la corredora de bolsa Inverlink \$3.300 millones y, al hacerse público el escándalo de los correos electrónicos, quiso retirar estas inversiones.

En la capital, un angustiado Eduardo Monasterio —que veía que la fuga de inversionistas lo estaba dejando sin liquidez— le pidió personalmente a Álvaro García que llamara a Kaplán para tranquilizarlo de forma que renovara sus instrumentos de inversión con el grupo.

García obedeció y el municipio sólo retiró \$1.700 millones. El resto se perdió, probablemente para siempre.

En este escenario, la situación de Kaplán comenzó a complicarse frente a las presiones del Concejo municipal. Fue entonces cuando se supo de las llamadas y los concejales se fueron contra García. El municipio presentó una querrela por estafa y, posteriormente, solicitó el procesamiento del ex ministro.

Frente a esta solicitud y ante la expectación pública, el juez Patricio Villarroel lo procesó como cómplice de estafa en octubre del 2003. Pero acá la suerte le sonrió ya que las portadas de diarios y canales de TV se las llevaron ese día las declaraciones de la diputada de RN Pía Guzmán, quien mientras el ex secretario de Estado era informado que lo sometían a proceso, declaraba que en la red de pedófilos vinculada al empresario Claudio Spiniak había parlamentarios involucrados.

Desde un comienzo los juristas vinculados al caso vieron “débil” el procesamiento que resolvió Villarroel, el que habría respondido más a presiones medáticas que a una convicción de culpabilidad. ¿Resultado? Primero la Corte de Apelaciones y luego la Suprema anularon el proceso.

Tras varios meses retirado de las pistas, García volvió en septiembre del 2004 al redil de los preferidos de La Moneda y fue designado como embajador en Suecia, una plaza diplomática que no es menor, ya que en Suecia viven 35 mil chilenos. Esto le permitiría a García alejarse de todo tipo de escándalos, y a futuro, quién sabe, hasta podría volver a ocupar cargos de relevancia pública. Eso dependerá de la capacidad de olvido de la ciudadanía.

Mal también lo pasó Julio Bustamante, aunque por cierto, mejor que García. Perteneciente a las filas de la DC, tras ostentar el cargo de Superintendente de AFP por más de diez años se había sumado al grupo pocos meses antes del escándalo y, si bien ocupó la presidencia de la isapre Vida Plena y la AFP Magíster —ambas propiedad del holding—, no tuvo ninguna responsabilidad legal en el caso.

Desde que estalló el escándalo Bustamante ha preferido trabajar silenciosamente en lo suyo: el tema de los fondos de pensiones. Pasa alrededor de la mitad del mes fuera de Chile, ya que está trabajando para el Banco Mundial y el Banco Interamericano del Desarrollo en diversas asesorías.

Además, hace unos ocho meses se asoció con su amigo Álvaro Clarke, ex superintendente de Valores y Seguros — DC como él— para prestar asesorías en temas previsionales, fundamentalmente a países de Centroamérica, entre ellos El Salvador y República Dominicana.

Bustamante ha declarado en varias oportunidades durante el proceso, y precisamente por el tema de las asesorías internacionales, fue uno de los primeros en lograr que se le levantara el arraigo que pesaba en su contra.

Capítulo VI

El rostro del proceso

No ha sido fácil la tarea judicial del juez que investiga el caso Corfo Inverlink Patricio Villarroel. Pese a llevar casi 18 meses a cargo del caso aún no hay ni sombra de un cierre del sumario. Y la razón es simple: el magistrado tiene aún un sinnúmero de diligencias pendientes y como optó por acumular todas las aristas del caso en una sola gran causa aún no puede ponerle el broche a ninguna de ellas.

Además el magistrado se enfrentó al ingrediente adicional que es la complejidad financiera del caso.

Por último pero no menos importante, Villarroel ha tenido que lidiar con una salud frágil. La labor del magistrado se ha visto interrumpida durante meses por un cáncer que padece y cuya operación ha postergado en innumerables oportunidades. En resumen, el caso avanza poco.

El magistrado ya tiene sobre su escritorio un expediente con 28 tomos y una veintena de procesados, entre los que destacan el presidente del cuestionado grupo, Eduardo Monasterio, y su cúpula de directores, y los ex operadores de corredoras de bolsa bancarias Gino Tirapegui y Juan Pablo Prieto, del Scotiabank y del BBVA respectivamente.

Desde el punto de vista penal, la tarea más compleja que le espera a Villarroel es acreditar que las empresas Inverlink y sus personajes

principales operaron como una asociación ilícita. Y el propio juez reconoce esta situación²¹.

Esta tesis ya fue planteada en algunas de las querellas que forman parte del caso, entre las que destaca la de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y el SII.

La importancia de acreditar este paso judicial es que los involucrados arriesgan hasta diez años tras las rejas, ya que las penas por este delito son muy superiores a las que se exponen por ilícitos financieros.

Sin embargo, Villarroel está analizando el tema con extremo cuidado para que cuando redacte el fundamento jurídico que respalde un procesamiento por asociación ilícita, sea confirmado en las cortes de Apelaciones y Suprema.

Un importante elemento para configurar este delito lo incorporó la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de los principales directores de Inverlink por evasión tributaria de más de \$3.300 millones.

Los elementos que Villarroel estaría buscando ahora son "amarrar" una infracción a la Ley de Valores —por la captación ilegal de dineros a través de Inverlink Consultores— con una evasión tributaria sistemática de esta firma. En consecuencia, determinar que Eduardo Monasterio creó esta empresa con el manifiesto objetivo de delinquir.

²¹ Reiteradas entrevistas personales.

Cara a cara con la banca

Tal como Pamela Andrada cometió un error garrafal que destapó la fuga de información desde el Banco Central, la desesperación también terminó por liquidar a Monasterio quien en persona dejó en evidencia su máquina delictual.

El martes 4 de marzo del 2003 —es decir, tres días antes de que se supiera el desfaldo de Inverlink a la Corfo— Yerko Koscina, secretario general de la entidad estatal, recibió como a las cinco de la tarde una sorpresiva llamada mientras arreglaba sus cosas para retirarse a su hogar²². Al otro lado del teléfono estaba su colega y amigo Gonzalo Romero Astaburuaga, nada menos que el fiscal del Banco Santander-Chile, la entidad financiera más importante del mercado local.

Romero le solicitó una audiencia inmediata, pues necesitaba conversar personalmente con él para hacerle una consulta profesional que no deseaba efectuarla telefónicamente, a lo cual Koscina accedió de inmediato.

A pocos minutos, llegó a su oficina Gonzalo Romero y, después del intercambio de los saludos de rigor, le explicó que al Banco Santander le estaban ofreciendo pagar una deuda con documentos de la Corfo, los que aparecían endosados por el señor Javier Moya Cucurella.

Romero reparó en la existencia en el endoso de una sola firma ya le parecía extraño y dudoso. La otra duda que tenía provenía del hecho de que,

²² Declaraciones de Yerko Koscina a la Comisión investigadora del caso Inverlink.

en apoyo del citado endoso, se había acompañado al banco una copia de una resolución²³ en la cual se establecía que las remesas entre cuentas corrientes bancarias, las operaciones de cambio y las colocaciones transitorias de disponibilidades de caja podían ser dispuestas y autorizadas por cualquiera de los cinco funcionarios indicados en ella, entre los cuales figuraba el señor Javier Moya Cucurella.

A Romero esta situación la pareció sospechosa ya que, a primera vista, la resolución no comprendería la facultad de endosar, por lo cual le interesaba conocer el criterio de la Corfo al respecto.

Después de leerla, Koscina expresó que —en su opinión profesional— era coincidente con la manifestada por él, ya que en dicha resolución no se otorgaba la facultad de endoso de manera explícita. Le agregó que se trataba de un tema de la fiscalía de la Corfo, por lo que iría a consultar la opinión del fiscal Bernardo Espinoza y le pidió que lo esperara en su oficina mientras hacía las averiguaciones correspondientes.

El fiscal, después de leer la resolución, también estimó que ella no otorgaba esa especial facultad, por lo que le pidió que lo acompañara a la secretaría de la fiscalía, para revisar si había alguna otra resolución o antecedente adicional que respaldara la facultad ejercida por el funcionario Moya.

Conjuntamente con el fiscal, se procedió a revisar los archivos de las resoluciones y escrituras de mandato existentes, con resultados negativos,

²³ Resolución exenta N° 831 del 12 de diciembre de 1997, del vicepresidente de la Corfo, transcrita por Javier Moya. Consta en el informe de la comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.

ya que no encontraron ningún documento ni antecedente que le otorgara Javier Moya poder especial para endosar documentos de la Corfo. Con estos sospechosos antecedentes Espinoza solicitó que Koscina le diera esta información al fiscal del Banco Santander.

Como él no tenía conocimiento de la operación consultada, le dijo que pidiera a la gerente de administración y finanzas —María Isabel Pinochet— que se preocupara de averiguar de qué se trataba en este asunto, a fin de que adoptara las medidas que estimara pertinentes en caso de que fueran necesarias. Espinoza, según recuerda, ni siquiera sospechaba en ese momento el tema que tenía entre manos ²⁴.

Koscina bajó a su oficina y ahí manifestó a Gonzalo Romero que en verdad no existía ningún otro documento que otorgara explícitamente a Javier Moya la facultad de endoso. En seguida, en su presencia, llamó por citófono a Isabel Pinochet, a quien, después de informarla sobre la consulta hecha por el Banco Santander, le manifestó que, por encargo del fiscal, procediera a preocuparse de ver todo lo concerniente a esta operación.

Gonzalo Romero, a poco de terminar la extraña jornada, se despidió agradeciendo la atención dispensada a su gestión.

Sin embargo, durante aquella visita de Romero hubo un antecedente que el fiscal del Santander nunca dijo.

Su interés era consultar la validez de los endosos de unos depósitos a plazo de la entidad estatal por \$7.000 millones que pretendía vender en el

²⁴ Reiteradas entrevistas personales con el fiscal de la Corfo, Bernardo Espinoza.

banco hispano el mismo Eduardo Monasterio. En medio de la fuga de ahorrantes de Inverlink generada por el escándalo de la fuga de información del Banco Central, el presidente del holding pretendía pagar una deuda de su corredora de bolsa con el Banco Santander por \$ 1.000 millones, y quedarse con los \$6.000 millones restantes como vuelto.

Esa tarde Romero volvió a su oficina y abortó la operación aunque retuvo los documentos en espera de que, al día siguiente, Eduardo Monasterio llegara con otro mecanismo de pago válido para saldar la deuda pendiente tal como se había comprometido.

Sin embargo, el intento fallido del día 4 de Monasterio fue la primera operación física con los títulos Corfo sustraídos por Javier Moya. Hasta esa fecha, las transacciones con documentos de la Corporación se habrían efectuado por remate electrónico.

Pese a no haber generado liquidez con la venta de los depósitos, un día después, el 5 de marzo, Antonio Viñes —abogado de Monasterio— saldó la deuda con el Santander, cumpliendo así la palabra de su jefe. Claro que esta vez el dinero también era robado.

El jurista pagó al banco \$980 millones con un vale vista tomado por Corfo en el BCI a nombre del Banco Santander, documento que fue robado por Javier Moya días antes de la operación. Es decir, la entidad de origen hispano recibió el pago pese a saber que Moya claramente estaba excediendo sus atribuciones.

Hasta el día de hoy al interior del gobierno el interés por saldar el compromiso de Monasterio genera suspicacias dado que a esas alturas Inverlink ya tenía la mayoría de sus deudas impagas.

Pese a que ya era de público conocimiento el tema de la fuga de información desde el Banco Central en el Santander siempre han argumentado que al recibir el pago no tenían conocimiento del desfalco en Corfo, caso que se destapó cuando informó Gonzalo Rivas el viernes 7 de marzo.

La Corfo inició una demanda civil y un proceso criminal en contra del Santander con el fin de recuperar los \$980 millones. Incluso, solicitó el procesamiento del fiscal Gonzalo Romero. El juez Villarroel, sin embargo, lo eximió de toda culpa definitivamente. La causa civil, en tanto, podría durar años.

El otro frente

Sin duda la Corfo fue la principal víctima del fraude cometido por el grupo Inverlink y los dineros que los máximos ejecutivos del grupo robaron estarían en Chile y en el exterior. Sin embargo, la tarea de encontrarlos no es simple. De hecho, en la misma Corfo están concientes que puede ser un proceso que dure años. Por ahora, lo primero es dejar identificado su paradero.

En Chile, el trabajo ha estado coordinado por el mismo vicepresidente ejecutivo Óscar Landerretche, que se informa permanentemente de los avances que está teniendo Investigaciones en el caso; tanto Bridec (Brigada de Delitos Económicos) como Brilac (Brigada de Investigación de Lavado de Activos).

Hasta ahora, la principal vía de rescate de los recursos que robó Inverlink viene por la declaración de quiebra de las empresas más importantes del grupo: Consultores, Corredores y Capitales. Con la liquidación de sus activos —que incluye la AFP Magister, la isapre Vida Plena y la clínica Las Lilas— se juntó parte de los \$ 85.000 millones que Inverlink sustrajo a Corfo. En total, unos \$12 mil millones líquidos.

Por ello la Corfo está empeñada en sacar adelante las acciones revocatorias ²⁵ que ya fueron presentadas ante la justicia por sus abogados. Estas consisten en pedir judicialmente a quienes retiraron sus dineros de Inverlink antes de la crisis, que los devuelvan en virtud de que todos los acreedores tengan la misma posibilidad de recuperar a prorrata. Según abogados de la plaza, lo normal es que los acreedores recuperen por partes iguales en las quiebras un 20% aproximado de lo invertido.

²⁵ Las acciones paulianas o revocatorias abren la posibilidad de dejar sin efecto los contratos, en particular de ventas de activos, celebrados hasta un año antes de la quiebra. El razonamiento legal tras las **acciones** revocatorias es que las operaciones durante el año anterior a la quiebra pueden ser consideradas sospechosas y, por tanto, revocables por la justicia civil. La legislación de quiebras establece presunciones de derecho en cuanto a que una operación tiene carácter fraudulento, aunque no haya existido verdaderamente dolo.

Así, el grupo de acreedores de Inverlink Consultores —del cual Corfo representa el 95% de las acreencias—, demandó a 18 inversionistas que recuperaron sus dineros desde la fallida sociedad en un período sospechoso.

Si la Corfo prueba a través de esta acción que quienes salvaron sus fondos en los días previos a la cesación de pagos actuaron de mala fe, sería anulado y tendrían todos que devolver los \$48 mil millones que recuperaron.

La ley permite revocar los pagos en tres situaciones. La primera y más fácil es cuando la empresa quebrada aparece donando platas sin justificación; luego están los pagos anticipados y la tercera forma es cuando se retira el dinero en la fecha de vencimiento, pero con información privilegiada; es decir, sabiendo que la empresa está en cesación de pagos.

Corfo también alega que en la mayoría de los casos no hay causa jurídica que justifique los pagos. Como ejemplo señala que la mayoría de los demandados operó con la Corredora, pero recibieron los pagos de la Consultora.

Pero la pelea en esta área se viene ruda ya que las contrapartes de la estatal son connotadas empresa chilenas. Entre los afectados por estas medidas revocatorias destacan la Municipalidad de Viña del Mar (\$1.500 millones); el Puerto de San Antonio (\$ 3.500 millones); la Constructora Sacyr (\$ 20.000 millones); la Caja de Previsión de la Defensa Nacional

(más de \$ 8.000 millones) e Inversiones Prospecta, Comanda y Santa Cecilia —de propiedad de José Yuraszeck (\$ 8.000 millones).

También figura una lista de varios inversionistas naturales con montos que oscilan entre los \$500 y \$600 millones.

Los corredores involucrados

De los \$85.000 millones que Inverlink sustrajo de la Corfo, casi \$32.000 se triangularon a través de dos corredores de bolsa locales de origen bancario: BBVA y Scotiabank.

El equipo jurídico de la estatal encabezado —por el penalista Alfredo Etcheberry— asegura que estas entidades transgredieron la norma que establecía que Corfo sólo intermediaba títulos con corredoras de bolsa de origen bancario, por lo tanto ambas corredoras no debieron haber aceptado títulos de la estatal en favor de Inverlink.

En el caso del BBVA la Corfo solicitó al juez Villarroel el embargo de casi \$27.000 millones basándose en un fallo emitido por la Corte de Apelaciones de octubre del 2003. Sin embargo, el juez Patricio Villarroel otra vez falló en favor de los intereses bancarios y sólo decretó un embargo por \$30 millones.

Entre diciembre de 2002 y febrero de este año miembros del grupo Inverlink realizaron a lo menos 11 operaciones de venta y compras a término por un monto de \$26.435.974.232 con la intermediación de un operador de la corredora del BBVA , Juan Pablo Prieto.

Este ejecutivo, a su vez, reconoció haber recibido de parte de Inverlink \$5 millones por sus servicios.

Similar es la situación de Gino Tirapegui del Scotiabank. Él recibió cerca de \$3 millones de parte de Inverlink y, a cambio, entre diciembre del 2002 y enero del año pasado, trianguló cerca de \$3.000 millones en depósitos a plazo de la Corfo.

En octubre del año 2003 la Corte de Apelaciones —ante un recurso presentado por Corfo— resolvió que las operaciones se desarrollaron a través de una triangulación “de carácter engañoso y simulado, para así insertar estas transacciones en el mercado, percibiendo las corredoras sus respectivas comisiones”²⁶.

Por ello, la base jurídica de la estatal se funda en la supuesta infracción a los artículos 53 y 56 de la Ley de Valores.

²⁶ Fallo del 1 de octubre de 2003. En el se reafirma la tesis de Corfo referente a que los instrumentos que operaba su mesa de dinero sólo podían ser canalizados a través de corredoras pertenecientes y/o respaldadas por bancos. "Inverlink no tenía esa calidad pero logra el concurso de operadores de las sindicadas corredoras (...) quienes obtienen de los agentes de Inverlink pagos por la suma de \$20.000.000 y del encargado de la mesa de dinero de Corfo, eludiendo de esta manera la prohibición ya conocida en el mercado financiero para (operar con) Inverlink", apunta.

El primero de estos apartados menciona que es contrario a la ley efectuar cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor, ya sea que se lleven a cabo en el mercado de valores o a través de negociaciones privadas²⁷.

La Corte de Apelaciones ya acogió este recurso procesando junto a los dos agentes de corredoras bancarias a Eduardo Monasterio y Javier Moya, además de otros ejecutivos de Inverlink. Todos arriesgan hasta 10 años de cárcel.

En la Corfo también solicitaron al juez Villarroel que aplique el artículo 56 de la citada Ley de Valores, que afirma que los directores, liquidadores o el gerente de una bolsa que no ejerzan sus deberes de fiscalización conforme a sus estatutos, reglamentos internos y demás normas que las rijan, sea respecto del mercado que opera en dicha bolsa o de las personas que en él intervienen, quedarán afectos a las sanciones administrativas que aplique la Superintendencia de Valores, en conformidad a la Ley ²⁸.

Ante estas lapidarias pruebas los canadienses cedieron. Tras justo un año de negociaciones, la Corfo llegó a un acuerdo extrajudicial con la

²⁷ "Artículo 53 de la Ley de Valores: "Ninguna persona podrá efectuar transacciones o inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento".

²⁸ Artículo 56 de la ley de Valores: "Si de esta omisión, resultare daño a cualquiera persona serán obligados a la indemnización de perjuicios respondiendo hasta de la culpa leve a menos que probaren haber actuado diligentemente", señala el apartado

corredora de bolsa Scotiabank Sudamericano por medio del cual la entidad norteamericana le pagó \$3.000 millones por el accionar irregular de Gino Tirapegui.

Distinta es la situación con el BBVA, entidad que ha presentado una fuerte batalla judicial y comunicacional. La estrategia de la entidad de origen hispano ha sido que el robo que sufrió a la Corfo se debe únicamente a las negligencias en sus controles internos.

Las platas fuera del país

¿Hay platas de Inverlink fuera de Chile? Para rastrear el camino que siguieron los millones en el resto del mundo, Corfo contrató en junio a una agencia especializada en estos afanes, Kroll. Para esta firma este difícil trabajo no es nada nuevo ya que en el pasado rastreó —con mucho éxito— los dineros del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari y el ex mandatario de Perú, Alberto Fujimori.

Kroll trabaja con integrantes provenientes de organismos especializados como la CIA de Estados Unidos. De hecho su dueño, Julius Kroll, es era un alto ex agente de este organismo secreto.

Estos han estado trabajando durante meses coordinadamente con las policías de Chile. Claro que los resultados de su gestión tendrán que

evaluarse en los próximos meses y recién ahí la Corfo verá si extiende o no el contrato con la agencia.

En forma paralela, un prestigioso estudio de abogados de Miami, Greenberg&Traurig, está actuando como coordinador de las diligencias legales que encarga Corfo en EE.UU., tales como rastrear operaciones realizadas por Inverlink con bancos internacionales.

En todo caso, en la estatal saben que la recuperación de dineros desde el exterior es difícil. Sin embargo, la orden de Lagos es clara: hacer todo lo que se pueda para conseguirlo. Todo. Y algo han logrado.

Tras intensas negociaciones la Corfo consiguió un beneficioso acuerdo extrajudicial con el Pine Bank de Miami mediante el cual la entidad financiera canceló US\$4,2 millones a la estatal.

El pacto con el banco estadounidense —que contiene varias cláusulas de confidencialidad— se selló el 12 de marzo del 2003 en EE.UU. y recién el viernes 18 de ese mes la Contraloría General de la República tomó razón de él.

El Pine Bank se vio involucrado en el caso Inverlink luego que cerca de US\$15 millones ingresaran a la cuenta de Inverlink Holding BVI en dicha entidad financiera. Posteriormente, el Pine Bank prestó esa cantidad a cuatro sociedades de inversión controladas por los principales socios de Inverlink: Eduardo Monasterio, Ignacio Wulf, Enzo Bertinelli y Francisco

Edwards, quienes así transfirieron el dinero de vuelta a Chile, “lavando” el origen de estos capitales.

Pero hasta ahí llega la historia. No se ha logrado encontrar ni un peso de Inverlink más, ni en Chile ni en el extranjero. Mientras los principales involucrados alegan que no tienen nada salvo lo puesto, en la Corfo elaboran todo tipo de especulaciones respecto de dónde puede estar la plata. Una de ellas y —tal vez la más aventurada— es que los dineros no han podido rastrearse debido a que los días previos a que se destapara el escándalo Monasterio y compañía compraron una gran cantidad de dólares que, en este momento, están escondidos en alguna parte. Tal vez nunca se sepa dónde.

La labor de Landerretche

En abril del 2003 parecía que la noche se venía encima para la Corfo luego que estallara la bomba de racimo que fue Inverlink.

Tras un terremoto político y financiero, en esa oportunidad un recién asumido Óscar Landerretche en la vicepresidencia ejecutiva de la estatal hablaba de que utilizaría la “táctica del judo”²⁹ para hacer frente a la millonario crisis que tenía entre manos, esto es, “utilizar la fuerza en contra para convertirla en energía”.

²⁹ Entrevista en Diario Financiero, 24 de abril del 2003.

Un año más tarde, el panorama ya se mostraba más despejado durante entrega la cuenta pública y balance 2004, en el marco del 65° aniversario de la estatal en que Landerretche mostraba bajo el brazo \$12 mil millones recuperados.

Y es que la labor de este economista ha sido bien evaluada en La Moneda por dos razones: ha posicionado a la estatal como agente de fomento —sacándola de la coyuntura noticiosa de Inverlink— pero sin dejar defender los intereses públicos que hay detrás.

En la estatal se sintió su mano. Y fuerte. La comparación con el renunciado Gonzalo Rivas eran demasiado favorables para este último según comentan los subalternos de Landerretche. Ejemplo sobran. Mientras Rivas almorzaba todos los días en el casino del edificio corporativo instalado en el piso 9, su sucesor no lo ha hecho jamás.

Incluso, cuando Landerretche llega a la Corfo e ingresa por la puerta ubicada en la calle Moneda llama antes a la portería para que le retengan el ascensor de forma tal que no tenga que esperar en el primer piso. Y claro, nadie más se puede subir al elevador si va él.

Pero en La Moneda saben que era el hombre de la ocasión de la Corfo. Mejoró los mecanismos de control internos a través de fuertes fiscalizaciones, renovación de personal y externalización de servicios. Uno

de los más importantes fue el anuncio de licitar la mesa de dinero ³⁰de la estatal al BancoEstado, para evitar así que se repita la tentación de echar mano a esos cuantiosos dineros públicos. De hecho, la mesa de dinero de la Corfo tiene un patrimonio superior a los US\$450 millones.

³⁰ Declaraciones de Óscar Landerretche a El Mercurio el 7 de abril del 2004

Capítulo VII

Un año más...

Marzo fue el mes de Inverlink. El 2003 reventó el caso y un año después sus principales responsables obtenían su libertad bajo fianza.

El 11 de marzo, después de un año y un día detenidos, la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago concedió la libertad provisional a Eduardo Monasterio Lara, ex presidente del hoy desaparecido grupo Inverlink; a su socio Ignacio Wulf y al gerente general de la corredora de Bolsa del holding, Enzo Bertinelli. La resolución se fundó en que habían permanecido demasiado tiempo en prisión preventiva y que no existían diligencias pendientes.

A las cuatro de la tarde de ese mismo día cada uno tomó su camino. Desde el centro de Santiago todos se dirigieron donde sus respectivas familias, de quienes prácticamente no se han separado en ningún momento. Incluso, los han acompañado donde sus abogados. Porque la cúpula de Inverlink dedicó sus primeros días en la calle a reencontrarse con su gente.

Eduardo Monasterio tenía el 2003 el 30% del holding, bienes inmuebles con un avalúo fiscal por \$ 44.480.586; una casa, dos departamentos en Las Condes y uno en Viña del Mar. Pero según los registros de Dicom, ahora tiene, además, deudas impagas por \$ 61 millones,

su RUT registra numerosas consultas y acumula, junto al proceso criminal, seis demandas de cobranza de igual número de bancos.

El ex empresario, casado en segundas nupcias con Eliana Neumann, quien mantiene propiedades por \$ 232 millones en Río Negro, Las Condes y Lo Barnechea, volvió un día después de salir en libertad a Capuchinos para cumplir con una tradición de quienes han estado detenidos en ese lugar: entregar una torta a los que permanecen en el recinto para no volver.

Tras meses en libertad y a la salida del Tribunal donde había concurrido a firmar, un delgado Monasterio se acerca y reitera que se arrepiente “de haber cometido esa estupidez, pero nunca fue mi intención, nunca”³¹.

Según dice lo perdió todo, hasta su mujer. Y claro, aunque no lo quiera confesar la separación con Eliana fue traumática para él. Sobre todo porque ella lo dejó por otro hombre, nada menos que Pedro Toledo, el abogado que Monasterio contrató mientras estaba preso para que manejara la quiebra de sus empresas. Nadie sabe para quién trabaja.

Ignacio Wulf, de 64 años, quien era el vicepresidente de Inverlink, se ha mantenido casi sin salir de su departamento, según cuentan sus cercanos. Ahí ha recibido a sus amigos y se ha dedicado preferentemente a descansar y a analizar su situación procesal y económica: registra morosidades por \$ 76 millones en Dicom.

³¹ Conversación personal con Eduardo Monasterio en octubre de 2004

El primer fin de semana que Bertinelli tuvo en libertad se fue a Casablanca, donde su madre. Sigue yendo a misa los domingos. Su casa en el condominio El Refugio permanece vacía de lunes a viernes ya que vive junto a su esposa e hijos en la capital. Luego de que se descalabrara el holding, su señora vendió el Audi y se trasladó con los dos hijos a un departamento en Vitacura. Los matriculó en el Saint George.

Javier Moya Cucurella, el ex operador de la mesa de dinero de Corfo, se ha mantenido principalmente en su hogar desde que recuperó su libertad el 8 de marzo del 2004. Vive en un condominio de Peñalolén y maneja un jeep Cherokee verde que tenía hace un año. Está casi igual que cuando cayó preso. Vive con su esposa, Paulina Vuskovic, y una de sus hijas. Nunca ha querido dar declaraciones.

Los cuatro principales responsables del escándalo financiero más grande de los noventa, a pesar de que tienen varios procesamientos en su contra, tal vez nunca vuelvan a la cárcel. Sus causas aún están pendientes aunque tiene la garantía de que, en el peor de los casos, no van a tener una larga estadía en la cárcel si es que tienen que volver. Son delincuentes de cuello y corbata.

Referencias

Esta investigación se basó en el valioso aporte que realizaron muchas personas vinculadas con el caso, algunas de ellas, si bien no aparecen mencionadas expresamente, contribuyeron a la construcción de una historia lineal.

Desde que estalló el caso Inverlink en febrero del 2003 hasta octubre del 2004 tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de personajes claves en el caso, muchas de las cuales en más de una oportunidad:

- Patricio Villarroel Valdivia, ministro en visita
- Eduardo Monasterio Lastra, ex presidente de Inverlink
- Antonio Viñes, abogado de Eduardo Monasterio
- Oscar Landerretche, vicepresidente ejecutivo de CORFO
- Gonzalo Rivas, ex vicepresidente ejecutivo de CORFO
- Bernardo Espinosa, fiscal de CORFO
- Gonzalo Insunza, abogado de Javier Moya
- Miguel Ángel Nacrur, fiscal del Banco Central
- Rodrigo Ávila, abogado Pamela Andrada
- Rodrigo Hinzpeter, abogado de CORFO en la parte civil
- José Hinzpeter, abogado representante de un grupo de inversionistas estafados por Inverlink
- Pedro Pablo Gutiérrez, abogado BBVA
- William Jalaff, primer interventor de las quiebras Inverlink holding
- Hermann Chadwick, segundo interventor de Inverlink holding

- Marcos Sánchez, sindico de Inverlink capitales
- Álvaro García Hurtado, ex presidente de la compañía de seguros Le Mans
- Julio Bustamante, ex presidente AFP Magíster
- Alejandro Ferreiro, superintendente de Valores y Seguros
- Álvaro Clarke, ex superintendente de Valores y Seguros
- Manuel Inostroza, superintendente de Salud
- Guillermo Larraín, superintendente de AFP
- Hernán Somerville, presidente de la Asociación de Bancos
- Jorge Palomas, gerente general de la Asociación de Fondos Mutuos
- Jorge Burgos, diputado y presidente de la comisión investigadora de Inverlink.
- Nicolás Monckeberg, diputado integrante de la comisión investigadora de Inverlink

Índice

	Página
Los rostros del caso.....	2
Prólogo.....	3
La gran sorpresa.....	4
El escenario.....	10
<u>Capítulo I</u>	
Tienes un email.....	13
El engranaje.....	16
La defensa corporativa.....	22
Aparece Enzo.....	26
Reunión de camaradas.....	28
El millonario estilo de vida.....	30
<u>Capítulo II</u>	
La avalancha.....	33
<u>Capítulo III</u>	
El Jarrón perdido.....	41
<u>Capítulo IV</u>	
Ruedan cabezas.....	50
<u>Capítulo V</u>	
Los responsables.....	58
La política.....	61
Los rostros públicos.....	62

Capítulo VI

El rostro del proceso.....	66
Cara a cara con la banca.....	68
El otro frente.....	72
Las corredoras involucradas.....	74
Las platas fuera del país.....	77
La labor de Landerretche.....	79

Capítulo VII

Un año más.....	82
Referencias.....	85